

El principio de No Intervención

Dr. Orlando Guerrero Mayorga



Cuaderno N° 2
Colección Jurisprudencia

Cuadernos de Investigación de la UCA es una publicación de la Dirección de Investigación de la Universidad Centroamericana (UCA). Los trabajos publicados en los *Cuadernos* expresan las opiniones de sus autores y no necesariamente la de la Dirección de Investigación de la UCA. Su contenido puede ser reproducido, citando la fuente y enviando copia de lo publicado a la siguiente dirección: *Cuadernos de Investigación de la UCA*. Dirección de Investigación. Apartado postal 69. Fax: (505) 267-0106. Teléfono: (505) 278-3923 al 3927. Managua, Nicaragua. Correo electrónico: encuentr@ns.uca.edu.ni

Director

Marcos Membreño Idiáquez

Asistentes de edición

Iván Marín Argüello
David Orozco Gonzalez

Mercadeo y distribución

Roxana Guerrero Guillén

Impresión

Imprenta I. T. S. A.

Diseño y diagramación

Fernando Ulises Centeno López
Imprenta UCA

La Universidad Centroamericana (UCA) de Managua es una universidad privada de servicio público e inspiración cristiana, administrada por los jesuitas. Fue fundada en 1960.

Además de la Dirección de Estudios Generales y la Dirección de Posgrado, la UCA posee cinco Facultades: Humanidades, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas y Empresariales, Comunicación, y Ciencias y Tecnología del Ambiente.

También forman parte de la universidad, el *Instituto de Investigación y Desarrollo "Nitlapán"*, el *Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA)*, el *Centro de Análisis Socio Cultural (CASC)*, el *Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina (PREAL)*, el *Instituto de Encuestas y Sondeo de Opinión (IDESO)*, el *Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA)*, el *Instituto Juan XXIII*, el *Centro de Investigación del Camarón (CIC)*, el *Centro de Malacología*, la *Estación Solar VADSTENA-UCA* y el *Centro de Biología Molecular (CBM)*.

INDICE

Introducción	4
El Principio de No Intervención	5
El Principio de que los Estados se abstendrán de usar la fuerza o amenaza de fuerza	7
El Principio de No Intervención	12
El Principio de la igualdad soberana de los Estados	18
El Principio de No Intervención en el Comité Jurídico Interamericano	21
Casos de violaciones al principio de no intervención constatadas por el Comité Jurídico Interamericano en su período ordinario de sesiones de enero - febrero de 1974	25
Alcance de la No Intervención	33
Intervención legal e ilegal	36
¿Existencia de un derecho de intervención?	37
Conclusiones	39
Bibliografía	42

Introducción

Para una mejor comprensión del Principio de No Intervención, he asumido el compromiso, como Catedrático de Derecho Internacional Público, de hacer un análisis jurídico sobre aquellos aspectos fundamentales del Principio de No Intervención que entran en contradicción con un pretendido derecho de intervención esgrimido por los Estados Unidos (EEUU) para justificar su hegemonía en el continente americano.

El ordenamiento jurídico internacional se ve afectado por constantes conflictos entre Estados. En dicho contexto surge la necesidad de resolver de manera pacífica las controversias que se suscitan entre los Estados involucrados en las mismas, recurriendo a mecanismos políticos de arreglo o justiciable como en el caso de Nicaragua vrs. EEUU.

He analizado este principio de No Intervención en conexión con los principios de No Amenaza o Uso de la Fuerza y de Igualdad Soberana de los Estados, en su triple dimensión: Derecho Internacional Público Convencional, Derecho Internacional Público Consuetudinario y Resoluciones de diversos Organos de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Me he apoyado en los resultados de las sesiones de trabajo del Comité Especial de la ONU que condujeron a la aprobación por la Asamblea General de la ONU, de la Resolución 2625 (XXV) y del Comité Jurídico Interamericano (C.J.I.), que permitió al Consejo Permanente de la OEA aprobar la Resolución 424 (612/85) que ratifica el contenido de aquélla.

En diferentes períodos históricos, los EEUU han violado reiteradamente el Principio de No Intervención. En el caso de Nicaragua, desde 1856, cuando el filibustero William Walker se proclama Presidente de Nicaragua, hasta la sentencia del 27 de Junio de 1986 de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que condena al Gobierno de los Estados Unidos de América por violar los principios consuetudinarios de No Intervención, de No Uso de la Fuerza, de Igualdad Soberana del Estado nicaragüense y de No Intervenir el Comercio Marítimo pacífico y por violar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito por ambos países en 1956.

El Principio de No Intervención

El Comité Especial y su resultado: La Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU sobre los principios del Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

En cumplimiento de la R/1966 (XVIII); el Comité Especial de los 7 Principios de Derecho Internacional quedó integrado por 31 miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguiendo un criterio amplio en relación a los distintos sistemas ideológicos-políticos, raciales y sociales de los Estados miembros de este Comité. En su composición, se rigió "por el principio de la distribución geográfica equitativa y la necesidad de que en el Comité Especial estuviesen representados los principales sistemas jurídicos del mundo".

La resolución R/1815 de la (XVII) Asamblea General Ordinaria de la ONU enumeraba los 7 grandes principios concernientes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados, cuyo estudio y desarrollo progresivo y codificación se consideraban necesarios. Estos principios son:

1) El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

2) El principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia.

3) La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta.

4) La obligación de los Estados de cooperar entre sí, conforme a la Carta.

5) El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.

6) El principio de la igualdad soberana de los Estados.

7) El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta.

La violación del Principio de No Intervención por medio de la fuerza armada directa o indirecta es también una violación del principio que proscribe la amenaza o el uso de la fuerza y a la vez una violación del principio de la igualdad soberana de los Estados, que descansa en el respeto a la integridad territorial, en la independencia política del Estado y en la libre elección por un Estado de llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural. Sin embargo, todos los principios arriba mencionados son fundamentales y se conjugan armónicamente. En este aspecto, cabe destacar la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya del 27 de Junio de 1986, sobre las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, en la que condenaba a los Estados Unidos de América por violar principios absolutos y sagrados del derecho internacional que son interdependientes. Así, esta Sentencia, en el párrafo dispositivo 6, dice "que al colocar minas en las aguas internas o territoriales de la República de Nicaragua durante los primeros meses del año 1984, los Estados Unidos de América han actuado contra Nicaragua en violación de sus obligaciones según el dere-

cho internacional consuetudinario de no usar la fuerza contra otro Estado, de no intervenir en sus asuntos, de no violar su soberanía y de no interrumpir el comercio marítimo pacífico" (Corte Internacional de Justicia, 1986:14).

Nótese en esta cita que en un sólo acto de fuerza los Estados Unidos transgredieron 4 principios del derecho internacional: el no uso de la fuerza; la no intervención en los asuntos internos o externos; la igualdad soberana y la no interrupción del comercio marítimo pacífico.

Es interesante examinar los trabajos del Comité Especial de la ONU sobre los 7 principios del derecho internacional y los del Comité Jurídico Interamericano (C.J.I.) tendientes a elaborar el proyecto de un instru-

mento que defina los casos de violaciones del principio de no intervención. Los trabajos del C.J.I. culminaron el primero de mayo de 1985, con la aprobación de una resolución del Consejo Permanente (C.P.) de la OEA (Res/424) (612/85). Dicha resolución fue ratificada por la XV Asamblea General Ordinaria de la OEA y recoge íntegramente la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU. En consecuencia, nos proponemos en este capítulo realizar el recorrido histórico en ambos órganos (el Comité Especial y el Comité Jurídico Interamericano), centrándonos particularmente en la interrelación del principio de no intervención con los principios de no amenaza o del uso de la fuerza y de la igualdad soberana. Siguiendo un orden lógico, comenzaremos con el principio de no uso de la fuerza.

El Principio de que los Estados se abstendrán de usar la fuerza o amenaza de fuerza

Los principios que prohíben la amenaza o uso de la fuerza, la no intervención, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, aspiran a regular el cambio social en la Comunidad Internacional. En cambio, los principios de arreglo pacífico de las controversias, igualdad soberana de los Estados, obligación de los Estados de cooperar entre sí y el cumplimiento de buena fe de los Estados de sus obligaciones, presuponen aceptación de la estructura política de la sociedad internacional. Estamos de acuerdo con la Profesora Elisa Pérez Vera en que ambos grupos de principios tienen el interés común de asegurar la coexistencia pacífica en el seno de la sociedad internacional. Y es "esta identidad teleológica la que los dota de una naturaleza común y justifica en definitiva su formulación en un sólo instrumento jurídico"(Pérez, 1973:42).

Por lo tanto, el principio que prohíbe la amenaza o uso de la fuerza se corresponde con el de no intervención como reguladores del cambio social. Y estos se emparentan con el principio de igualdad soberana de los Estados como guardianes de la coexistencia pacífica.

En lo que respecta a la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza, en los trabajos del Comité Especial (1964) se presentaron 3 propuestas provenientes de los grupos cualificados políticamente en el seno de la VI Comisión y dentro del Comité de México. Dichas propuestas eran diferentes, según las distintas interpretaciones de los 7 principios, las cuales obedecían a distintos intereses ideológico-políticos. Para los occidentales, el contenido del principio se reducía a las formas tradicionales del uso de la fuerza (ataque armado). Para los países no alineados era

necesario reconocer otras formas del uso de la fuerza de distinta índole a las contempladas en la Carta de San Francisco, pero criticadas en las actuales relaciones entre los Estados; tales formas eran la presión económica, política o de otra índole.

El planteamiento sobre el alcance del término "fuerza", el estudio de las formas de coacción políticas y económica, los límites jurídicos de la agresión directa e indirecta van a ser las directrices de estudio por las que el Comité Especial va a actuar.

Respecto al concepto de "fuerza", se presentaron en el Comité de México (1964) una serie de elementos nuevos en relación con lo que se entendía por el término de "fuerza" en el texto de la Carta de San Francisco. El estudio del Comité Especial alcanzaba la fuerza armada, fuerzas regulares e irregulares, fuerzas compuestas de voluntarios, bandas armadas, agresión indirecta y las represalias armadas. El Comité estudió las presiones o coacciones económicas, políticas o de otra índole.

También abordó los problemas de fronteras y las líneas de demarcación internacional. Este Comité de México no pudo llegar a un acuerdo sobre una definición amplia del término "fuerza", ya que algunas delegaciones interpretaron que en este término estaba comprendido no sólo la fuerza armada, sino también la presión política, la presión económica y otras formas de presión. Se afirmó que si bien ciertas formas de presión política y económica infringían evidentemente los principios de derecho internacional, tales formas de presión habían de ser consideradas en conexión con la intervención y no en lo que atañe a la amenaza o el uso de la fuerza.

Es importante que mencionemos dos de los puntos de acuerdos del Comité Especial (1964): el inciso b, según el cual "Cada Estado tiene el deber de abstenerse de organizar fuerzas irregulares o compuestas de voluntarios o bandas armadas, dentro de su territorio, para hacer incursiones en el territorio de otro Estado o de alentar la organización de las mismas". Y el inciso c, que dice: "Cada Estado tiene el deber de abstenerse de instigar, auxiliar u organizar la lucha civil o cometer actos de terrorismo en otro Estado, o de tolerar o dar su asentimiento a actividades organizadas con tales fines, cuando esos actos supongan la amenaza o el uso de la fuerza" .

Algunas delegaciones no estaban de acuerdo con la inclusión de estos incisos en el principio de no uso de la fuerza, pero sí lo estaban con que se incluyeran dentro del principio de no intervención.

En el informe de la VI Comisión de la ONU (Documento A/6165), con respecto al tema 90 del programa, titulado "Examen de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas", se dijo que en el Comité Especial (México 1964) no se pudo llegar a un consenso sobre el principio de no amenaza o del uso de la fuerza. Sin embargo, se estuvo cerca del consenso, ya que el Comité preparó un proyecto de texto en el que se formulaban los puntos de acuerdos, destacándose que "cada Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas" .

Ningún representante en la VI Comisión expresó su desacuerdo sobre el fondo de ningún punto del proyecto de texto que acabamos de citar.

El documento presentado por el Comité Especial (A/AC, 125/DC. 17), que fue el fruto de la sesión de 1967, en Nueva York, contenía los siguientes aspectos relevantes: no se llegó a un acuerdo sobre la formulación del principio de no uso de la fuerza; tampoco se logró un acuerdo sobre los puntos referentes a las líneas de demarcación internacional y a la propaganda de la guerra. No obstante se logró un acuerdo sobre las prohibiciones de los incidentes de fronteras. Hubo también un acuerdo sobre la prohibición de las represalias. Quedaban sin aclarar la determinación de la naturaleza jurídica de la prohibición de las bandas armadas para hacer incursiones en el territorio de otros Estados y la instigación a las guerras civiles y los actos de terrorismo, ya que se postulaban como aspectos ligados más al principio de intervención que al de no uso de la fuerza. Tampoco se logró un acuerdo sobre los temas más novedosos como son las guerras de liberación colonial como legítima defensa y la prohibición de las presiones de tipo económico y político equivalente a formas nuevas de fuerza" .

En lo que respecta al principio de no amenaza o al uso de la fuerza, en las observaciones hechas por los representantes de los países miembros de la ONU, en la VI Comisión, se señaló que el Comité Especial (1968) había realizado progresos reales que algunos calificaron de considerables o importantes, en lo que atañe a la formulación de este principio. Además, se dijo que los puntos de acuerdo a los que se había llegado en ese año, ampliaban el área de acuerdo conseguida en 1967, en el seno del Grupo de Trabajo establecido por el Comité de Redacción y que habían recibido la aprobación del propio Comité Especial.

Estos puntos de acuerdos eran: los enunciados relativos a las prohibiciones generales del recurso a la fuerza, de la guerra de agresión y de la propaganda en favor de la guerra, del uso de la fuerza en controversias territoriales y problemas fronterizos, de los actos de repre-

salía que impliquen el uso de la fuerza, de la organización de bandas armadas, incluidos los mercenarios para hacer incursiones en el territorio de otro Estado, de la instigación a la guerra civil y a actos de terrorismo. No obstante, quedaban aún sin resolver puntos difíciles que eran los pertinentes al alcance del término "fuerza", a las controversias territoriales, la inviolabilidad del territorio de un Estado y el no reconocimiento de situaciones resultantes del uso de la fuerza. Tampoco quedaron resueltos los puntos relacionados con la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados y con el ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos.

Sobre el alcance del término de "fuerza" existían dos posiciones. Para algunos representantes, sobre todo de los países desarrollados, este término significaba exclusivamente "fuerza armada". Para otros, el término era de un contenido más amplio ya que incluía el recurso a medidas coercitivas, ya fuesen políticas o económicas, tendientes a imponer la voluntad de un Estado sobre otro.

En el marco del vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, la VI Comisión conoció del informe del Comité Especial (1969) y en las observaciones sobre el principio de no uso de la fuerza, los representantes en esta Comisión acogieron con simpatía el avance logrado por el Comité en ampliar las bases del acuerdo, sobre este principio. Sin embargo, se indicó que aún quedaban varios problemas pendientes, entre ellos el uso de la fuerza para violar las líneas de demarcación internacionales, la ubicación de la prohibición de la organización de bandas armadas e instigación a la guerra civil y a actos de terrorismo, ya sea en los principios de no amenaza o al uso de la fuerza y en el de no intervención, o solamente en este último. Tampoco quedaban resueltos los problemas del uso de la fuerza contra pueblos coloniales, la ocupación militar, el no

reconocimiento de situaciones causadas por la amenaza o el uso ilegal de la fuerza, el significado del término "fuerza" y los usos legítimos de la fuerza. Un aspecto que quedó totalmente en silencio, era el tema de las presiones económicas, políticas o de otra índole. El Dr. Adnon Nachebe, consejero de la delegación permanente de la República Árabe Siria en las Naciones Unidas, al considerar el alcance del término "fuerza", expresó que ésta debía abarcar las formas de presión política, económica y de otro tipo que tengan por efecto amenazar la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Para el representante de Francia, en cambio, el inciso 4 del artículo 2 de la Carta de la ONU se refiere exclusivamente al uso de la fuerza armada y no abarca las formas de presión económica, política o de otro tipo. Nosotros opinamos que el inciso 4 del artículo 2 de la Carta de la ONU prohíbe todo uso de fuerza armada. No se refiere a otro tipo de fuerza, como las señaladas por el Dr. Nachebe. Además, con la aprobación de la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de la ONU, en el dispositivo 2, se sancionaba "el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado" (ONU, 1960:13), pero caían en el ámbito de la no intervención y no en el del principio de proscripción del uso de la fuerza entendida ésta como fuerza armada directa o indirecta a través de fuerzas irregulares, de bandas armadas y mercenarios. Por lo tanto, el artículo 51 de la Carta de la ONU es la excepción al artículo 2, párrafo 4 de la Carta. Y el artículo 2 párrafo 7 del mismo instrumento jurídico autoriza la aplicación de ambos tipos de fuerza: armada y/o económica y política, por medio del Consejo de Seguridad y dentro del capítulo 7 que dice: "Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz, o actos de agresión", sin que se violen los principios de no intervención y de no uso de la fuerza. Además, en el proyecto de declaración de los 7 principios,

en la sección del no uso de la fuerza se incorporaba el artículo 2 inciso 4 de la Carta de la ONU, el cual sólo prohíbe el uso de la fuerza armada directa o indirecta contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Por el contrario, el proyecto de declaración de los 7 principios, en su sección sobre la no intervención, sí comprendía la presión económica, política y de otra índole, la cual transgredía el principio de no intervención, pero no violaba el principio de no uso de la fuerza. En consecuencia, la presión económica, política y de otra índole aplicada por un Estado para coaccionar a otro Estado, con el fin de subordinar el ejercicio de sus derechos soberanos, es un tipo de fuerza distinta de la fuerza armada directa o indirecta. Sin embargo, estos distintos usos de fuerza no violarían el derecho internacional público si se fundamentasen en el artículo 51 de la Carta de la ONU.

Continuando con los trabajos del Comité Especial, la VI Comisión de Asuntos Jurídicos (1970) examinó los 7 principios del derecho internacional. En relación al principio de no uso de la fuerza, el representante norteamericano subrayó que el texto que aparecía en el proyecto de declaración de los 7 principios precisaba y reforzaba las disposiciones de la Carta, al referirse no solamente a los ataques armados convencionales, sino también a la ilicitud de organizar o fomentar fuerzas irregulares, cuadrillas armadas, actos de terrorismo y guerras civiles en otro Estado (ONU, 1970a:19). Señaló que las disposiciones relativas a la guerra civil y al terrorismo no limitaban el derecho de un Estado a prestar asistencia militar a otro Estado que la pidiera (Ibid.). Y agregó que la formulación del décimo párrafo de la sección del principio de no uso de la fuerza, que hace referencia a los actos de guerra civil o de terrorismo, no autorizan a un Estado a intervenir por la fuerza unilateralmente en los asuntos de otro Estado

(Ibid.). Según lo anterior el representante norteamericano reconoció la ilicitud de organizar o fomentar fuerzas irregulares y de intervenir unilateralmente en los asuntos internos de otro Estado. Sin embargo, Estados Unidos se reservaba intervenir militarmente a solicitud de un Estado. O sea, que dejaba un portillo abierto a las intervenciones solicitadas.

La Declaración 2625 (XXV) aprobada unánimemente por la Asamblea General de la ONU (1970), en el párrafo 1° formula el enunciado del principio de no amenaza o uso de la fuerza de la siguiente manera: "El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas" (ONU, 1970b). Esta Declaración en la sección del principio de no uso de la fuerza, párrafo 2do., reproduce el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU. En el párrafo 3o. señala que una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz y entraña responsabilidades. En el párrafo 4o. prohíbe la propaganda a favor de las guerras de agresión. En los párrafos 5o. y 6o., prohíbe el uso de la fuerza en las controversias territoriales y problemas fronterizos. En el párrafo 7, dice que los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalias que impliquen el uso de la fuerza. En el párrafo 8 se consagra el no uso de la fuerza para privar a un Estado de su derecho a la libre determinación, a la libertad y a la independencia de los pueblos aludidos en la formulación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación. En el párrafo 9, se proclama el deber de todo Estado de abstenerse de organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones en el territorio de otro Estado. En el párrafo 10, se dice que todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en

actos de guerra civil o en actos de terrorismo dentro de otro Estado o de consentir actividades organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos. Estos párrafos (9 y 10) también se encuentran comprendidos en la sección sobre el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta (párrafo 3, parte 2a) el cual dice: "Todos los Estados deberán abstenerse de organizar apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado" (Ibid.).

En los considerandos de la Sentencia del 27 de Junio de 1986, en el párrafo 228, la Corte Internacional de Justicia dice que Nicaragua había reclamado, que los Estados Unidos habían violado el artículo 2, párrafo 4 de la Carta, haciendo uso de la fuerza contra este país y habían transgredido su obligación bajo el derecho internacional consuetudinario: "reclutando, entrenando, armando, equipando, financiando, abasteciendo y además fomentando, apoyando, ayudando y dirigiendo acciones militares y paramilitares en y contra Nicaragua" (Corte Internacional de Justicia, 1986:118-119). Se dice también que la demanda de Nicaragua, que hace referencia al artículo 2 párrafo 4 de la Carta, quedaba excluida de la jurisdicción de la Corte, en virtud de la reserva hecha por los Estados Unidos al tratado multilateral. Sin embargo, la Corte afirma que la demanda de Nicaragua por las actividades de los Estados Unidos en relación a los Contras constituía una violación del principio de derecho internacional consuetudinario de no uso de la fuerza y únicamente quedarían los EEUU exentos de dicha violación en virtud de la legítima defensa. La Corte consideró que los EEUU, en primer lugar, cometieron una violación del principio del derecho internacional consuetudinario de no uso de la fuerza "Organizando o alentando

la organización de fuerzas irregulares o bandas armadas... para que incursionen dentro del territorio de otro Estado," y "Participando en actos de guerra civil en otro Estado, en los términos de la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General" (Ibid.). De acuerdo con esta Resolución, la participación de esta clase de actos es contraria al no uso de la fuerza cuando los actos de guerra civil referidos "constituyen una amenaza o uso de la fuerza" (Ibid.). En opinión de la Corte, el armar o entrenar a los contras constituye una amenaza o uso de la fuerza contra Nicaragua, pero esto no era atribuible a toda la ayuda dada por el Gobierno Norteamericano, particularmente el suministro de fondos a los contras, lo cual constituye indubitadamente un acto de intervención en los asuntos internos de Nicaragua y no equivale a actos que incluyen el uso de la fuerza (Ibid.). La Sentencia, en el párrafo dispositivo 4, mencionaba los ataques directos contra los principales puertos nicaragüenses y contra la Base Naval de Potosí, que violaban los principios de no uso de la fuerza, de no intervención y de igualdad soberana de los Estados (Idem., 146-147). Y en el párrafo dispositivo 6 señalaba que la colocación de minas en las aguas internas o territoriales de la República de Nicaragua viola también los principios consuetudinarios de no uso de la fuerza, no intervención, igualdad soberana de los Estados y el de no interrumpir el comercio marítimo pacífico (Ibid. 153).

El juez M. Nagendra Singh, Presidente de la Corte Internacional de Justicia, en su opinión individual de la Sentencia del 27 de junio de 1986, señaló que la Corte había subrayado que el principio de no uso de la fuerza era *ius cogens* y que era el centro de los esfuerzos desplegados por la humanidad para promover la paz en un mundo agitado por las guerras: "La fuerza engendra la fuerza y agrava los conflictos, ella envenena las relaciones y pone en peligro la solución pacífica de las diferencias" (Idem.).

El Principio de No Intervención

En los trabajos del Comité Especial 1964 sobre la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta, se presentaron 5 propuestas de los siguientes países: Checoslovaquia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ghana, India y Yugoslavia, éste último país retiraría su propuesta original. Guatemala y Estados Unidos presentaron enmiendas por separado a la propuesta del Reino Unido .

En los debates generales del Comité Especial, en lo que respecta a la no intervención, se dijo, entre otras cosas, que este principio era una piedra angular del sistema político y jurídico creado por la ONU y el fundamento de la coexistencia pacífica. Además, constituía la garantía de la igualdad soberana de los Estados y complementaba al principio de la libre determinación .

Se dijo también que, en el derecho consuetudinario, la igualdad soberana era el fundamento del deber de no intervención y dicho principio no tendría ningún valor si los Estados tuvieran derecho a intervenir en los asuntos internos de otros Estados . Se afirmó, además, que el principio de No Intervención era el corolario del principio del respeto a la integridad territorial y la independencia de los Estados garantizado por el párrafo 4, del artículo 2 de la Carta.

El derecho de los pueblos a la libre determinación implicaba claramente el principio de no intervención. Como consecuencia de este principio, existía la obligación de los Estados de respetar los sistemas políticos y sociales escogidos por cada pueblo . En relación con la frase inicial del artículo 2, párrafo 7 de la Carta, la no intervención afectaba tanto a la Organización como a los Estados miembros de la misma .

En los mismos debates se consideró como intervención :

- 1) Organización o adiestramiento de cualquier tipo de fuerzas de tierra, mar y aire destinadas a hacer incursiones en otros Estados.
- 2) Actividades subversivas o terroristas contra otro Estado o injerencia en las luchas civiles en otro Estado.
- 3) Contribución, suministro o provisión de armas o materiales de guerra destinados a promover o ayudar una rebelión o un movimiento sedicioso en un Estado .

El Comité Especial aprobó por unanimidad, por recomendación de su Comité de Redacción, en su 39 sesión, el siguiente texto: "La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta" . Sin embargo, el Comité no pudo llegar a un acuerdo sobre el alcance o el contenido de este principio.

En los debates de la Primera Comisión de Asuntos Políticos y de Seguridad, en el marco del vigésimo período de sesiones de la Asamblea General Ordinaria de la ONU (1965), que culminó con la adopción de la Resolución 2131 (XX), el delegado de los Estados Unidos se mostró complacido de ver recogido en el proyecto de resolución soviético la declaración de que la intervención no podía justificarse por ningún motivo, sea de carácter económico, político o ideológico. Y el delegado estadounidense agregó: "Por intervención ilegal debe entenderse algo más que los simples ataques armados a través de las fronteras internacionales. Igualmente real y tal vez aún más peligrosa, es la intervención mediante el fomento insidioso de la guerra de guerrillas, el adiestramiento secreto de bandas

armadas y la infiltración de agentes cuyo objetivo es aterrorizar y asesinar a personas inocentes e imponer la voluntad de otro gobierno de otra ideología" (ONU, 1965a:264).

En la 1408 Sesión Plenaria de la Vigésima Asamblea, en la que se aprobaría la Declaración 2131 (XX), el representante de los Estados Unidos señaló en su explicación de voto: "la Declaración establece una nueva prohibición contra la intervención de un Estado en los asuntos de otro y las disposiciones de la Declaración, así como su historia legislativa, ilustran, para su conocimiento y cumplimiento de todo el mundo, el casi universal aborrecimiento de modernísima y tan difundida forma de intervención que hoy amenaza la paz mundial: la intervención furtiva gracias al terrorismo y la subversión, para debilitar y derrocar los gobiernos nacionales de los Estados nacionales, soberanos e independientes"(ONU, 1965b:15).

Al interpretar las citas mencionadas, que reflejan en cierto modo la actitud de los Estados Unidos ante la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de la ONU, coincidimos totalmente con la posición de dichos representantes, cuando aceptan la tesis de proscripción absoluta de la intervención sea ésta de carácter económico, político o ideológico. Compartimos también el carácter ilegal no sólo de los simples ataques armados a través de las fronteras internacionales, sino además el de la intervención mediante el adiestramiento secreto de bandas armadas para derribar los gobiernos nacionales, soberanos e independientes. No podemos, sin embargo, aceptar la tesis de los EEUU de que la Declaración 2131 (XX) era una expresión del sentir político de la Asamblea y una exhortación para que se observasen unos principios justos de conducta (ONU, 1966:261). En nuestra opinión, la Declaración 2131 (XX) de la Asamblea era una convicción jurídica universal, puesto que en el Comité Especial compartimos la posición de Argentina,

Camerún, Checoslovaquia, Chile, Ghana, Guatemala, India, Kenia, México, Nigeria, Polonia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela, los cuales en su proyecto de resolución (AC.125/L.54) decían lo siguiente: "El Comité Especial, Recordando... la resolución 2131 (XX) del 21 de diciembre de 1965 de la Asamblea General, por el número de Estados que la votó; la extensión y profundidad de su contenido y, especialmente, por carecer de oposición, refleja una convicción jurídica universal susceptible de considerarla como un verdadero y definido principio de derecho internacional".

La resolución 2131 (XX) era histórica porque consagraba claramente en sus párrafos dispositivos 1 y 2 la proscripción absoluta de la intervención en los asuntos internos o externos de los Estados, sea cualquiera la forma y no importando los motivos. Asimismo, la Resolución 2131 (XX) prohibía a los Estados el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr subordinar el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden. Dicha Resolución prohibía también a los Estados organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado. La Resolución 2131 (XX) ratificaba el principio de libre determinación en el párrafo dispositivo 5 al decir: "Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado". Finalmente, la misma Resolución era histórica porque fue aprobada unánimemente por 109 países, con la sola abstención del Reino Unido de Gran Bretaña; también porque 64 oradores participaron en el debate en la primera Comisión de asuntos políticos y de seguridad, que duró 15 sesiones, en las que se examinaron 3 propuestas principales y 1 proyecto de declaración presentado por la

república Árabe Unida y ulteriormente patrocinado por 26 delegaciones de países no alineados. Asimismo, por el gran número de enmiendas (ONU, 1965b).

La Corte Internacional de Justicia, en su Sentencia de 27 de Junio de 1986 (en el párrafo 203), dijo que era verdad que los EEUU, cuando votaron a favor de la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General, también declararon al mismo tiempo que consideraban la declaración en esa resolución como "una declaración de intención política y no una formulación de derecho" (Corte Internacional de Justicia, 1986:107). La Corte agrega que lo esencial de la Resolución 2131 (XX) era repetida en la declaración aprobada por la Resolución 2625 (XXV), la cual había fijado principios que la Asamblea General declaró que eran los principios básicos de derecho internacional y sobre todo, que los EEUU no hicieron ninguna declaración análoga al aprobarse la Resolución 2625 (XXV) (Ibid.).

Continuando con los trabajos del Comité Especial en su vigésimo segundo período de sesiones en Nueva York (1967), en lo que respecta al principio de no intervención, el Comité de Redacción tomó nota de que "no había ningún informe del Grupo de Trabajo sobre el principio de no intervención en los asuntos que son de jurisdicción interna de los Estados". Evidentemente, ninguna formulación del principio de no intervención hubiera obtenido el consenso del Comité de Redacción, puesto que eran distintas las propuestas presentadas por los países. Sin embargo, la mayoría de los representantes en el Comité Especial discutieron el principio de no intervención, más bien en relación con el proyecto de resolución presentado conjuntamente por Argentina, Camerún, Checoslovaquia, Chile, Ghana, Guatemala, India, Kenia, México, Nigeria, Polonia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela (A/AC.125/L.54). Dicho proyecto decidía incluir los párrafos de la parte dispo-

sitiva de la Resolución 2131 (XX) en la del principio de la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, con el fin de incorporarlos al proyecto de declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados".

Por otra parte, los representantes de los EEUU, Italia, Reino Unido, los Países Bajos, Australia y Francia se opusieron al proyecto de Resolución de aquellos países porque, entre otras razones, no podrían aceptar ningún texto para su inclusión en una declaración, a menos que el Comité Especial actuara por consenso sobre cada uno de los 7 principios y sobre las disposiciones generales. Además, porque el proyecto de resolución parecía dar a entender que, contrariamente a su mandato, el Comité Especial, sin discutir el principio del mismo modo y con el mismo objeto que los demás principios, tenía que insertar en el proyecto de declaración el texto dispositivo de la Res. 2131 (XX), que ni en su fondo ni en su forma había sido debidamente examinado por el Comité Especial, ni por el Comité de Redacción".

En la Reunión del Comité Especial (1968), éste sólo tuvo tiempo de estudiar a fondo el principio de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza.

En 1969, el Comité Especial no avanzó en el examen del principio de no intervención, en espera de lo que resultara del examen del principio de no amenaza o del uso de la fuerza y del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, los cuales en la reunión del Comité experimentaron un avance significativo al ampliarse las bases de acuerdo sobre estos principios. Más de 50 países miembros de la ONU decidieron presentar en el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, un proyecto de resolución que fue aprobado y en el que se

pedía al Comité Especial resolver las cuestiones relacionadas con la formulación de los 7 principios, a fin de que se presentara un proyecto de declaración ante la Asamblea en su vigésimo quinto período de sesiones. Al presentarse el proyecto de resolución, se indicó que el Comité Especial debía dedicarse en primer término a terminar su labor sobre las formulaciones del principio relativo a la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza y del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, para después dedicarse a trabajar sobre los otros principios y a elaborar un proyecto de declaración."

El informe del Comité Especial (1970), presentado en la VI Comisión de las Naciones Unidas, contenía un proyecto de declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, el cual había sido adoptado por consenso en dicho Comité y que se esperaba fuera aprobado de la misma manera por la Asamblea, en su vigésimo quinto período de sesiones. Analizaremos dos posiciones que se dieron en los debates de los Estados miembros de la ONU sobre el examen de los 7 principios, en la VI Comisión: la de EEUU y la de Nicaragua. Para el representante de los EEUU, su gobierno había dado su conformidad al examen de estos principios a condición de que se tratase de un análisis prudente de los principios jurídicos fundamentales de la Carta y no, a una supuesta declaración sobre los principios de la coexistencia pacífica. Según este representante, ciertos países habían tratado de dar a la declaración una coloración política. Sin embargo, el representante estadounidense eliminaba la politización del Comité Especial al agregar que su gobierno se felicitaba de que el Comité no hubiera seguido semejante vía partidista (ONU, 1970a:19). Mas aún, el representante norteamericano admitió la objetividad de la declaración de los 7 principios cuando dijo: "El proyecto de declaración

constituye una formulación objetiva de los principios de la Carta" (Idem.). Y en cuanto al procedimiento de votación, dicho representante señaló que "... el Comité Especial tomó todas sus decisiones por consenso y unanimidad" (Ibid:19).

Para el representante de Nicaragua, su gobierno se ajustaba a las normas y a los principios de la Carta y del derecho internacional, prestaba su apoyo al proyecto de declaración y esperaba que fuera aprobado por aclamación tanto en la Comisión como en la Asamblea General (Ibid:34). En conclusión, opinamos que EEUU, al aprobar la Res. 2625 (XXV) de la Asamblea, se estaba obligando jurídicamente a no intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado sin importar los motivos ni la forma, puesto que el representante norteamericano no manifestó esta vez, como cuando aprobó la Resolución 2131 (XX), que la Declaración 2625 (XXV) fuera de intención política y no una formulación de derecho, sino que el gobierno estadounidense se felicitaba de que el Comité Especial no hubiera seguido semejante vía partidista y que admitía "la objetividad de la Declaración". Asimismo, el representante norteamericano no hizo ninguna reserva al aprobarse la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea. Por lo tanto, quedaba vinculado jurídicamente con dicha resolución.

La Corte, en su Sentencia del 27 de junio de 1986, dijo que los EEUU, al aprobar la Res. 2625 (XXV), no hicieron una declaración análoga a la hecha al apoyar la Res. 2131 (XX) (Corte Internacional de Justicia, 1986:107).

Nicaragua no sólo aprobó la declaración de los 7 principios, sino que había pedido en la VI Comisión su aprobación por aclamación, tanto en esta Comisión como en la Asamblea General. Quedaba también Nicaragua vinculada jurídicamente con la Res. 2625 (XXV) de la Asamblea General.

En la VI Comisión de Asuntos Jurídicos, se había aprobado la Res. (A/C.6/L.793 y Corr. 1 y Add. 1) sin votación oficial. Esta resolución fue aprobada por unanimidad en la Asamblea (1883 a Sesión Plenaria del día 24 de octubre de 1970). Nosotros opinamos que esto se debió a que en el Comité Especial se había llegado a aprobar por consenso el proyecto de declaración, ya que todos salían ganando algo a cambio de perder algo.

El delegado norteamericano expresó que su gobierno "Se congratulade que, aleccionado por la experiencia, el Comité Especial haya tomado todas sus decisiones por consenso y unanimidad" (ONU, 1970a:19).

Para el representante de México, el proyecto de declaración estaba redactado en términos claros y simples y se limitaba a recomendar a la Asamblea General que aprobara este proyecto, sin tratar de interpretarlo ni determinar su valor jurídico". (Idem:43).

Esta limitación, propuesta por recomendación de México a la Asamblea, hizo posible la aprobación de la Res. 2625 (XXV), ya que de abrirse de nuevo el debate sobre si ésta era una formulación política y no jurídica, o, al contrario censu, jurídica y no política, hubiera impedido el consenso y con esto su aprobación.

A continuación, los 5 grupos regionales de la ONU hicieron una breve declaración sobre la Resolución aprobada. Destacaremos dos posiciones, una de ellas es la de las Naciones Latinoamericanas, para quienes no se estaba proponiendo en la Declaración principios nuevos: "Sólo pedimos la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto a los principios de la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, la abstención de la amenaza o el uso de la fuerza, la libre determinación de los pueblos y la integridad territorial ".... (ONU, 1970c:5).

La otra posición es la del Grupo de Países de Europa Occidental y de otros Estados (EEUU), para quienes era a veces mejor transigir: "Hemos presenciado en la redacción de los documentos que acaban de aprobarse que a veces es mejor transigir. Si hemos logrado el consenso es porque todos, en cierta medida, nos hemos allanado a la opinión de los demás" (ONU,1970c:7).

A continuación transcribimos íntegramente la sección correspondiente al principio de no intervención:

"El principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta."

"Ningún Estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del derecho internacional".

Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas, encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado. El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención.

Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado. Nada en los párrafos precedentes deberá interpretarse en el sentido de afectar las disposiciones pertinentes de la Carta relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" (Pérez, 1973).

En su sentencia del 27 de Junio de 1986, en el párrafo 202, la Corte Internacional de Justicia dijo que son numerosas y no difíciles de encontrar las expresiones sobre una Opinión Juris, con respecto a la existencia del principio de no intervención en derecho internacional consuetudinario. Que la Carta de la ONU no incluía expresamente este principio pero que nunca se había intentado que la Carta incorporase explícitamente cada principio esencial de derecho internacional vigente. Que la existencia del principio de no intervención en la Opinión Juris de los Estados es apoyada por una considerable práctica de los mismos y que, además, este principio ha sido presentado como corolario del principio de la igualdad soberana de los Estados.

Un ejemplo de la Opinión Juris es la Res.2625 de la Asamblea General (Corte Internacional de Justicia, 1986:106). De acuerdo con estos considerandos de la Corte, el principio de no intervención es de derecho consuetudinario y la Res. 2625 (XXV) es un ejemplo de la Opinión Juris. Además, esta resolución recogía íntegramente la parte dispositiva de la Res. 2131 (XX) que contenía también los artículos 18 y 19 de la Carta de Bogotá reformada por el Protocolo de Buenos Aires (1967).

Concretamente, la Sentencia de la Corte, en el caso de las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en y contra Nicaragua (en el párrafo 241), deja claramente establecida, que el gobierno de los EEUU por su apoyo a los Contras ejerce una presión sobre Nicaragua en los asuntos donde

cada Estado puede decidir libremente en virtud del principio de soberanía de Estado y que el proyecto de los Contras es derrocar el gobierno actual de Nicaragua (Idem:124). La Corte consideró que en derecho internacional, si un Estado otorga su apoyo a bandas armadas cuya acción tiende a derribar el gobierno de otro Estado, esto equivaldría a intervenir en sus asuntos internos, cualquiera sea el objetivo político del Estado que suministra este apoyo (Idem.).

La Corte concluye, en consecuencia, que el apoyo suministrado por los EEUU, a finales de septiembre de 1984, a las actividades militares y paramilitares de los contras bajo la forma de apoyo financiero, de entrenamiento, de suministro de armas, instrucciones y de medios logísticos constituye una violación indubitable del principio de no intervención (Idem.). En relación al tema de la legítima defensa colectiva, la Corte señaló (en el párrafo 208) que los EEUU tendrían justificada únicamente en el plano legal su intervención apoyándose en la "clásica" regla que involucra la legítima defensa colectiva contra un ataque armado (Ibid:109).

Sin embargo, la Sentencia, en su dispositivo 2, por doce votos contra tres, rechaza la justificación de la legítima defensa colectiva sostenida por los EEUU en relación con las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Ibid:146). Finalmente el Juez Nagendra Singh, Presidente de la Corte Internacional, en su opinión individual sobre esta Sentencia, expresó que la importante doctrina de la no intervención en los asuntos de los Estados es esencial para la paz y el progreso de la humanidad; además de ser indispensable para el bienestar de la comunidad internacional. El principio de no intervención debe ser considerado como una "regla de derecho absoluta y sagrada y su no observancia traería consecuencias desastrosas e indecibles sufrimientos para la humanidad" (Ibid:156).

El Principio de la igualdad soberana de los Estados

En el seno del Comité Especial (1964) se presentaron cuatro propuestas sobre el principio de la igualdad soberana de los Estados: la de Checoslovaquia (A/AC.116/L.6), la de Yugoslavia (A/AC. 119/L.7), la del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (A/AC. 119/L.8) y la propuesta conjunta de Ghana, India, México, Yugoslavia (A/AC. 119/L.28); éste último país retiraría su propuesta original. En los debates generales en torno al principio de la igualdad soberana, se dijo que debía considerarse como una norma universalmente obligatoria del derecho internacional contemporáneo, y que era relevante el principio de igualdad soberana para la coexistencia pacífica. Varios representantes entendían este principio no como igualdad de poder, sino más bien como igualdad jurídica de todos los Estados, cualesquiera que fuesen su magnitud, su fuerza, su riqueza y su potencia económica o militar. Esto supondría para dichos representantes que todos los Estados, grandes o pequeños, eran iguales ante la ley y que ningún Estado podía pretender, bajo ningún pretexto, tratamiento o ventajas especiales, ni tratar de dominar a otros Estados.

Algunos representantes consideraron que el concepto de inviolabilidad de la personalidad, la integridad territorial y la independencia política de los Estados era un elemento integrante del principio de la igualdad soberana.

Asimismo, sugirieron que dicho principio implicaba el derecho de cada Estado a establecer libremente, sin intimidación, ni injerencia exterior, la estructura política, social y económica que mejor conviniera a los intereses del pueblo. Se dijo también que la independencia de un Estado implicaba también la independencia de su política interior y exterior.

El Comité Especial (1964) logró acuerdos acerca de los siguientes puntos:

- 1) Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Como sujeto de derecho internacional, tienen iguales derechos e iguales deberes.
- 2) En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes:
 - Los Estados son iguales jurídicamente.
 - Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía.
 - Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados.
 - La integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables.
 - Cada Estado tiene el derecho a elegir y llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural.
 - Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe con sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados.

El Doctor Antonio Remiro Brotons dice: "El principio de igualdad soberana, con sus corolarios, impone a los miembros de la sociedad internacional el deber inexcusable de "respetar la personalidad de los demás Estados", lo que se refleja inmediatamente en el principio de no intervención" (Remiro, 1983:84). La igualdad soberana es el fundamento del deber de no intervención y dicho principio no tendría ningún valor si los Estados tuvieran derecho a intervenir en los asuntos internos de otros Estados. Y de acuerdo con el Profesor José Antonio Pastor Ridruejo quien dice: "la igualdad soberana de los Estados comporta la independencia de los mismos y la prohibición que pesa sobre todo Estado de injerirse en los asuntos de otros" (Pastor, 1986:255).

En el informe de la VI Comisión de la ONU (Documento A/6165), en referencia a "el principio de la igualdad soberana de los Estados", se dice que los representantes celebraron que el Comité Especial (1964) hubiera podido llegar a un acuerdo sobre el texto de este principio y se estimó que era fundamental y constituía la única base jurídica posible para las relaciones amistosas y la cooperación entre Estados. No obstante, algunas delegaciones lamentaron que no se hubiera podido llegar a un acuerdo sobre los demás aspectos que consideraban importantes.

Estos eran el derecho de los Estados a disponer libremente de su riqueza y recursos naturales, derecho de los Estados a pedir la eliminación de cualquier posición privilegiada en sus territorios, el derecho a pedir el retiro de tropas extranjeras y la supresión de bases militares.

La Profesora María Luisa Espada Ramos categóricamente expresa que "si bien es verdad que es uno de los primeros principios sobre los que se logra el consenso, tampoco lo es menos que podría haberse incluido normas que son realmente vitales, ya que, como afirma el Profesor Carrillo, "esta formulación del Principio de la igualdad soberana de los Estados implica una valoración predominante formal del mismo, acaso la única posible en una sociedad de yuxtaposición de Estados soberanos" (Espada, 1971:156).

En principio, el Comité Especial (1967) había llegado a un acuerdo sobre la conveniencia de incorporar en la formulación del principio de igualdad soberana, un concepto de tanta importancia para los países en desarrollo: disponer libremente de su riqueza nacional y de sus recursos naturales. Además, se llegó a un acuerdo con respecto a la posible mención en el enunciado del principio de igualdad soberana del derecho de todo Estado a intervenir en la solución de cuestiones internacionales que afecten a sus intereses legítimos.

En su reunión de Nueva York (1968), el Comité Especial sólo tuvo tiempo de examinar el principio de no amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y el Comité Especial (1969) examinó los principios de no amenaza o del uso de la fuerza y el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, ya que sin el acuerdo por parte de los Estados de estos dos principios difícilmente se llegaría a una declaración de los 7 principios de derecho internacional, referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

La Corte Internacional de Justicia, en su Sentencia del 27 de junio de 1986 (en los párrafos 212 y 214), menciona que el principio de soberanía de los Estados está ligado con el principio de la prohibición del uso de la fuerza y de no intervención; que el concepto jurídico básico del principio de igualdad soberana de los Estados, se encuentra en el derecho convencional en el artículo 2, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y se extiende a las aguas internas y al mar territorial de cada Estado, así como también al espacio aéreo; que la Convención de Aviación Civil (Art.1) reafirma la soberanía de un Estado sobre el espacio aéreo dentro de su territorio y la Convención de Ginebra de 1958 sobre el mar territorial, especifica que la soberanía costera del Estado se extiende al mar territorial y a su espacio aéreo. Lo mismo establece la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar adoptada el 10 de diciembre de 1982. La Corte no tiene duda sobre estas prescripciones de Derecho de los Tratados, que se corresponden a las que han prevalecido largo tiempo en el derecho internacional consuetudinario (Corte Internacional de Justicia, 1986:111). Sigue afirmando la Corte su certeza de que, para disfrutar el acceso a los puertos, los buques extranjeros poseen un derecho consuetudinario de paso inocente en aguas territoriales, con el propósito de

dejar las aguas interiores (Véase el Art. 18, párrafo 1 (b), de la Convención de Derechos del Mar); que la libertad de navegación está garantizada, primero en la zona económica exclusiva, la cual existiría más allá del mar territorial (Art. 58 de la Convención de Derecho del Mar) y segundo, más allá del mar territorial y sobre la alta mar (Art. 57 de dicha Convención) (Corte Internacional de Justicia, 1986:111).

En consecuencia, de acuerdo con la Corte, cualquier Estado que disfruta de un derecho de acceso a los puertos para sus barcos también disfruta de toda la libertad necesaria para su navegación marítima. Por consiguiente, termina diciendo la Corte, "Si este derecho de acceso a los puertos es obstaculizado por la colocación de minas por otro Estado, afectaría a la soberanía costera del Estado sobre sus aguas internas y al derecho de libre acceso disfrutado por los barcos extranjeros" (Ibid 111 - 112). Asimismo, en lo que respecta al espacio aéreo, la Corte decidió por doce votos contra tres, en el párrafo dispositivo 5, lo siguiente: "Decide que los Estados Unidos de América, al dirigir o autorizar los sobrevuelos

del territorio nicaragüense y al cometer actos imputables a los Estados Unidos, a los que se refiere el párrafo (4) de la presente, ha actuado contra la República de Nicaragua en violación de su obligación según el derecho internacional consuetudinario de no violar la soberanía de otro Estado" (Ibid:147).

La Sentencia en el párrafo 251 dice que la soberanía territorial se relaciona con los principios de la prohibición del uso de la fuerza y de la no intervención, por lo que la asistencia a los Contras, los ataques directos a los puertos nicaragüenses, instalaciones petroleras, etc., no equivalen únicamente al uso ilegal de la fuerza, sino que también constituye una violación de la soberanía territorial de Nicaragua; al igual que las incursiones dentro, de sus aguas territoriales e internas. De la misma manera, las operaciones de minado de los puertos violan el principio de no uso de la fuerza y el de soberanía territorial de Nicaragua sobre ciertos espacios marítimos. El principio de soberanía territorial de Nicaragua también es violado por los EEUU al dirigir o autorizar los sobrevuelos (Ibid:128).

El Principio de No Intervención en el Comité Jurídico Interamericano

La V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, llevada a cabo en Santiago de Chile en agosto de 1959, adoptó la Resolución VII basándose en una propuesta del Canciller de Colombia, Dr. Julio César Turbay Ayala, sobre la necesidad de numerar los casos de intervención, en desarrollo del Art. 15 de la Carta de Bogotá (1948), así como la creación de un procedimiento para prevenir y reprimir dichas violaciones.

La Resolución VII dice:

1. Recomendar al Consejo de la Organización de los Estados Americanos que haga preparar, por el Organo que estime más apropiado: a) Un proyecto de instrumento en el cual se formule, a título meramente enunciativo, el mayor número posible de aquellos casos que constituyan violaciones al principio de no intervención; b) Un informe sobre la posibilidad de crear procedimientos adecuados que, sin configurar una intervención en los asuntos internos o externos de los Estados, aseguren la estricta observancia del principio de no intervención (OEA, 1975:15-16).

El Comité Jurídico Interamericano (C.J.I.) conoció la propuesta mexicana tendente a introducir en el sistema interamericano, la norma del artículo 2o. párrafo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual la organización de la misma no puede intervenir en asuntos que sean de la competencia interna de los Estados. Dicha propuesta no fue aceptada, ya que el (C.J.I.) en su dictamen de 1960 conceptuó que no era técnicamente aconsejable y que su adopción no traería ventajas al sistema actual establecido por las convenciones interamericanas.

Este Comité observó que una declaración no tiene alcance jurídico para enmendar la Carta y, de ser la proposición considerada como enmienda, participa de los defectos técnicos y de las ambigüedades del artículo 2o., numeral 7 de la Carta de la ONU (Caicedo, 1970:117). Este asunto de la no intervención por la OEA en los asuntos internos de los Estados, quedó plenamente dilucidado al adoptarse en la XIV Asamblea General Extraordinaria de esta Organización, en el mes de diciembre de 1985 (Cartagena, Colombia), un párrafo que reforma la vigente disposición del Artículo 1 de la Carta de la OEA, al cual se le agrega lo siguiente: "La organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros" (OEA, 1985a:3).

En respuesta al estudio encomendado por el Consejo de la Organización el 10 de septiembre de 1959, sobre la base de la Resolución VII de la V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el C.J.I. dictaminó: el Comité considera que la enumeración por vía de ejemplo, en un instrumento internacional de los casos en que hay intervención, revestiría notorias ventajas entre las cuales destacamos las siguientes:

- 1) Desarrollar en forma lógica y necesaria la disposición fundamental del artículo 15 de la Carta de Bogotá.
- 2) Consolidar un principio que es básico para la Organización de los Estados Americanos, al fijar normas precisas y concretas para su aplicación.

3) Evitar que por falta de esas normas un Estado pueda emprender acciones que en realidad comprometen la paz y la seguridad de América.

4) Contribuir a garantizar la tranquilidad del continente (OEA, 1975b:21-22).

Aceptado el sistema de enumerar las violaciones de la no intervención, el C.J.I. examinó el criterio que debía seguir en particular. Como la Resolución VII determinó la enumeración del "mayor número posible de casos", el C.J.I. estimó que la enumeración ha de ser amplia y comprender todos los que claramente constituyan intervención, sin limitarse a los comprendidos en la Convención de 1928 sobre Derechos y Deberes de los Estados en caso de luchas civiles. Por eso el C.J.I. elaboró un instrumento que contenía diferentes casos de intervención, como enseguida se explica:

Artículo. Serán consideradas como violaciones por parte de un Estado al principio de no intervención, además de otros actos que eventualmente puedan caracterizarse como intervención, las siguientes:

1. Cualquier forma de ingerencia o de tendencia atentatoria a la personalidad del Estado o a los elementos políticos, económicos, sociales y culturales que lo constituyen.

2. Aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas de cualquier naturaleza.

3. Permitir el tráfico de armas y material de guerra que se presuma destinado a iniciar, promover o ayudar una lucha civil en un Estado Americano.

4. Suministrar a cualquier título, armas de fabricación o propiedad oficial a personas o entidades distintas de los Estados, cuando se

presuma que están destinadas a los fines enunciados en el ordinal anterior.

5. Permitir que en las zonas bajo su jurisdicción cualquier persona nacional o extranjera, participe en la preparación, organización y ejecución de una empresa militar, que tenga como fin iniciar, promover o ayudar una rebelión o sedición en un Estado americano, aunque su gobierno no esté reconocido.

6. Los actos por los que directamente un Estado se opone a que en otro prevalezca determinada forma o composición de gobierno.

7. Los actos de coacción que directamente tiendan a imponer a otro país, organización o gobierno determinados, así como los actos destinados posteriormente a mantener la situación impuesta.

8. La acción que pretenda obligar a un Estado a admitir la interferencia o actividades de otro Estado en su administración de justicia o en cualquiera otra esfera de su competencia exclusiva.

9. Los actos por los cuales se pretenda imponer o se imponga a un Estado el reconocimiento de una situación privilegiada para los extranjeros, por encima de los derechos, recursos y garantías que conceda a los nacionales la legislación local.

10. El empleo de la coacción para obtener arreglos territoriales o ventajas especiales de cualquier naturaleza.

11. El reconocimiento de las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales obtenidas por cualquier medio de coacción.

12. El ejercicio abusivo del reconocimiento de gobiernos en contravención de las normas establecidas por el derecho internacional o como medio para obtener ventajas injustificadas (Ibid.:21-22)

Los literales a) y b) del proyecto se tomaron de los artículos 15 y 16 de la Carta de Bogotá y el literal k), del artículo 17.

Los literales c) y e) se tomaron de disposiciones de la Convención de 1928, sobre Derechos y Deberes de los Estados en caso de luchas civiles, que se han venido aplicando con el asentimiento general. El literal d) se relacionaba con una situación nueva, o mejor dicho, surgida después de 1928: la fundación de fábricas oficiales de armas en algunos países. Era natural que tales fábricas no debían servir para aprovisionar a elementos particulares deseosos de fomentar o iniciar una revuelta en otro país. Si lo hacían, se demostraba la voluntad o la intención del Estado propietario de estar de acuerdo en interferir clara y decididamente en la política interna del otro país y en la Constitución de su gobierno. Los literales f) y g) se referían a dos casos notorios de intervención, en los cuales la soberanía del Estado quedaba supeditada a la voluntad extranjera. El literal h) condenaba la intervención de un Estado en la administración de justicia, típico caso de intervención, dado que el poder de administrar justicia, es un atributo del Estado que no debe ser menoscabado. El literal i) se relacionaba con la igualdad del tratamiento de nacionales y extranjeros frente a la jurisdicción y legislación locales. Los literales j) y k) calificaban de intervención el empleo de coacción para obtener arreglos territoriales o ventajas especiales de cualquier naturaleza. Dichos literales estaban tomados de la Carta de Bogotá (artículo 17) y del Tratado Saavedra Lamas. Finalmente, el literal l) contemplaba el ejercicio abusivo del reconocimiento de gobiernos.

En cuanto al segundo aspecto del estudio del C.J.I., "sobre la posibilidad de crear procedimientos adecuados que, sin configurar una intervención en los asuntos internos o externos de los Estados, aseguren la estricta observancia del principio de no intervención", el C.J.I. llegó en primer término a la conclusión

de que la V Reunión de Consultas de los Ministros de Relaciones Exteriores había empleado acertada y felizmente la expresión de "crear procedimientos". En efecto, el C.J.I. agregaba que ninguno de los organismos que funciona actualmente en la OEA tienen las facultades pertinentes, ni existen en los tratados vigentes, mecanismos o procedimientos susceptibles de ser aplicados, por lo cual había necesidad de innovar y de crear. Asimismo, el informe del C.J.I. señalaba los diversos caminos que podrían seguirse, para asegurar la estricta observancia del principio de no intervención. Resumimos dicho informe de la siguiente manera. "Tiene, por lo tanto, la Undécima Conferencia Interamericana varias opciones: o celebrar el tratado que regule el asunto, o aprobar una estipulación que refiera el problema a organismos y procedimientos creados por tratados o normas en vigor, o aplazar el estudio de esta cuestión procedimental para ser considerada posteriormente, previo estudio de órgano competente y permitiendo a los gobiernos americanos la oportunidad de hacer las observaciones que estimen oportunas al primer anteproyecto que se prepare" .

La Conferencia mencionada nunca llegó a celebrarse. Siguiendo con el dictamen del C.J.I., el delegado de Estados Unidos expresó su opinión disidente que, en síntesis, se expresa como sigue: Que no era práctico ni beneficioso para la paz definir la intervención mediante la compilación de una lista de casos, puesto que la intervención, como la agresión, no es un concepto factible de definir y tratar de definirla sería imposible, ilusorio y engañoso y además promovería la intervención . Esta opinión disidente del delegado norteamericano evidentemente obstaculizaba el desarrollo en forma lógica y necesaria de la disposición fundamental del artículo 15 de la Carta de Bogotá (1948), impidiendo la fijación de normas precisas y concretas para su aplicación, no contribuyendo a garantizar la tranquilidad del Continente, ya que dejaba

su interpretación a la voluntad unilateral de los EEUU de si había tenido lugar o no una intervención, y arrastraba por la presencia hegemónica de ésta a un sinnúmero de países miembros de la OEA a disfrazar o camuflar la intervención bajo la atractiva fórmula de la legítima defensa o de una acción colectiva. Es más, consideramos posible y conveniente definir la intervención de la misma manera que se define la agresión en el TIAR o en la ONU. Definir el alcance del principio de no intervención serviría de pauta a los gobiernos para inspirar su línea de conducta e ilustrar a la opinión pública americana sobre el alcance y extensión de aquel principio. Sin embargo, está claro que con definición o sin definición, con delimitación o sin delimitación del alcance del principio de no intervención, si no cambia en la práctica la actitud de EEUU, de considerar a Centroamérica como su traspatio y a Latinoamérica como su zona de influencia, continuará violando, el principio de no intervención.

El C.J.I. (1974) conoció nuevamente el tema "Casos de violaciones al principio de no intervención", sobre el cual el día 23 de octubre de 1959, ya había elaborado un proyecto de instrumento que enumeraba 12 casos de intervención. El C.J.I. formó un grupo de trabajo cuyo relator fue el Prof. Edmundo Vargas Carreño y al preparar su proyecto de instrumento que completaba el proyecto de 1959, tuvo en cuenta tres fuentes principales:

A) El proyecto de instrumento sobre casos de violaciones al principio de no intervención elaborado por el C.J.I. en 1959.

B) El documento "Antecedentes oficiales sobre el tema de la no intervención, respecto de actos ocurridos desde el 23 de octubre de 1959", preparado por la Secretaría General de la OEA en enero de 1973.

C) Las resoluciones 2131 (XX) y 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU (OEA, 1974:61).

No es sino hasta el período de sesiones de enero-febrero de 1974, cuando el C.J.I. dispuso del tiempo necesario para dedicar parte de sus trabajos al tema asignado. Sobre la base del documento preparado por el relator Vargas Carreño y después de un detenido estudio e intercambio de opiniones, el C.J.I. aprobó una lista de casos de violaciones del principio de no intervención decidiendo remitirla al C.P. una vez aprobada la exposición de motivos. Para esta fecha ya había sido aprobada por la Asamblea General Ordinaria de la OEA una Resolución (AG/Res.78 (II-0/72), que se titula "Fortalecimiento de los Principios de no intervención y Autodeterminación de los pueblos y medidas para garantizar su observancia" y transcribe íntegramente el contenido del principio de no intervención de la Res. 2131 (XX) de la Asamblea General de la ONU (1965), cuyo contenido también sería incluido en la Res. 2625 (XXV) de la Asamblea de la ONU (1970). Asimismo, el C.P. adoptaría íntegramente la Res. 2625 (XXV) el 1 de mayo de 1985, al aprobar la Resolución (CP/Res. 424 (612/85), la cual fue examinada por la XV Asamblea General Ordinaria de la (OEA, 1985), en Cartagena Colombia, siendo confirmada unánimemente. La Res. AG/Res. 78 (II-0/72) en la parte dispositiva 1 "Reitera solemnemente la necesidad de que los Estados miembros de la Organización observen estrictamente los principios de no intervención y autodeterminación como medio de asegurar la convivencia pacífica entre ellos y se abstengan de todo acto que directa o indirectamente pueda constituir una violación de los mismos" (OEA, 1972: 44-46). Y la Resolución CP/Res. 424 (612/85) en su dispositivo 1 dispone: "Reafirmar el Principio de no intervención, tal como está formulado en los artículos 18 y 19 de la Carta de la Organización, como norma vigente de conducta de los Estados" (OEA, 1985c). La lista de nuevos casos aprobados por el C. J. I. que violan el principio de no intervención la abordaremos a continuación.

Casos de violaciones al principio de no intervención constatadas por el Comité Jurídico Interamericano en su período ordinario de sesiones de enero - febrero de 1974

Casos de violaciones al principio de No Intervención constatadas por el Comité Jurídico Interamericano en su período ordinario de sesiones de enero-febrero de 1974

El criterio que utilizaremos para desarrollar este punto será comprobar, si la modificación en la redacción de los casos de violación al principio de no intervención que aparecen en el dictamen de 1959, hace variar esencialmente su contenido al haberse ampliado y actualizado en el dictamen de 1974.

Serán considerados como violaciones del principio de no intervención por parte de un Estado o grupo de Estados, además de otros actos que eventualmente puedan caracterizarse como intervención los siguientes:

1) Cualquier forma de injerencia o de tendencia atentatoria a la personalidad del Estado o a los elementos políticos, económicos, sociales y culturales que lo constituyen.

Observamos que no hay innovación con el dictamen de 1959.

2) El uso de la fuerza o la aplicación o estímulo de medidas coercitivas de carácter económico, político o de cualquier otra índole para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Se introduce la frase "el uso de la fuerza" y se modifica someramente la redacción. Este numeral trata de dos situaciones, ambas ten-

ientes a forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventaja de cualquier naturaleza. La primera está constituida por el uso de la fuerza, la segunda es la aplicación o estímulo de medidas coercitivas, las que pueden ser de carácter económico, político o de cualquier otra índole. Se amplía y actualiza el dictamen de 1959.

3) La concentración inhabitual de fuerzas armadas o las maniobras militares desmedidas realizadas en la frontera con otro Estado, cuando las circunstancias o las relaciones existentes entre esos Estados permitan presumir un propósito intimidatorio para alcanzar las finalidades de los numerales 1 y 2.

Hay innovación con el dictamen de 1959.

4) Las maniobras navales o aéreas que en aguas sometidas a la jurisdicción de un Estado realicen buques o aeronaves de guerra de Estados extranjeros sin previo consentimiento del Estado ribereño. La simple presencia de naves de otro Estado en estas aguas se considerará como intervención, cuando puedan presumirse propósitos intimidatorios.

Hay innovación con respecto al dictamen de 1959.

5) Las maniobras navales o aéreas que en aguas adyacentes a las sometidas a la jurisdicción de un Estado realicen buques o aeronaves de Estados extranjeros y cuando de tales maniobras se permita presumir un propósito intimidatorio.

Propósito "intimidatorio" es un elemento subjetivo que en los casos 4 y 5 tipifica el acto de intervención, pues sin él se estaría en presencia de acciones perfectamente normales y aceptadas por el Derecho Internacional o la práctica de los Estados, como lo son, según el caso, el paso inocente o la libre navegación existente entre el presunto interventor e intervenido, al igual que en el numeral tercero, determinarán si existe o no ese propósito intimidatorio. Hay innovación con relación al dictamen de 1959.

6) La organización, apoyo, fomento, financiamiento, instigación o tolerancia de actividades armadas, subversivas o terroristas que tengan efecto en otro Estado así como la participación en una guerra civil extranjera.

La intervención referida comprende entre otros actos:

A. Permitir el tráfico de armas y material de guerra que se presuma destinado a iniciar, promover o ayudar una lucha civil en otro Estado.

B. Suministrar armas a cualquier título a personas o entidades distintas de los Estados, cuando se presuma que se destinan a los fines enunciados en el ordinal anterior.

C. Permitir que en las zonas bajo su jurisdicción cualquier persona nacional o extranjera, participe en la preparación, organización y ejecución de una acción militar o de actividades económico-financieras que tengan como fin, iniciar, promover o ayudar una rebelión o sedición en otro Estado.

El caso 6 comprende los casos cubiertos por los apartados c), d) y e) del dictamen de 1959.

7) Los actos por los que un Estado se opone a que en otro prevalezca determinada forma o composición de gobierno o se hagan efectivas las transformaciones socio-económicas que éste emprenda.

8) Los actos de coacción que tiendan a imponer a otro Estado una organización o un gobierno determinado.

9) La acción que pretenda obligar a otro Estado a admitir interferencia en actividades de su competencia exclusiva, incluyendo su administración de justicia.

Los casos 7, 8 y 9 corresponden a los contemplados respectivamente por los apartados f, g y h, del dictamen de 1959. En el caso 7, se ha agregado la frase "o se hagan efectivas las transformaciones socio-económicas que éste emprenda", en consideración a que los actos de intervención no sólo pueden tener por objeto impedir un determinado sistema político, sino también las transformaciones de carácter social o económico.

En el caso 8 se ha eliminado la frase "así como los actos destinados posteriormente a mantener la situación impuesta" por estimarse innecesaria. El caso 9 reproduce la norma del dictamen anterior con un cambio de redacción que permite incluir el género en primer término.

10) Los actos por los cuales se pretenda imponer o se imponga a un Estado el reconocimiento, de una situación privilegiada para los extranjeros, por encima de los derechos, recursos y garantías que conceda a los nacionales la legislación local.

Este caso 10 se corresponde al apartado i) del dictamen de 1959.

11) El empleo de la coacción para obtener arreglos territoriales.

El caso 11 corresponde al apartado j) del dictamen de 1959. Tan sólo se ha eliminado la frase "o ventajas especiales de cualquier naturaleza". Este texto, como el del apartado j) se basa en el actual Art. 20 de la Carta.

12) El ejercicio abusivo del reconocimiento de gobierno en contravención de las normas establecidas por el derecho internacional o como medio de obtener ventajas injustificadas.

El caso 12 se corresponde al apartado 1) del dictamen de 1959. Hay una total innovación del dictamen del C.J.I. (1959) en los casos siguientes:

13) La propaganda o la difamación por cualquier medio de comunicación, incitando a la subversión en otro Estado.

14) La operación de redes clandestinas de espionaje y comunicación que facilite el movimiento de personas, fondos y propaganda con fines subversivos.

15) La intromisión, con los fines señalados en los numerales 1 y 2, de servicios de espionaje o inteligencia en los asuntos privados de otro Estado.

El C. J. I. decidió condenar la conducta de tales servicios, tipificándola de intervencionista, cuando sus labores trascienden la mera información a los gobiernos a los cuales pertenecen o pretenden inmiscuirse en los asuntos internos del Estado en el cual actúan.

16) La intromisión, imputable al Estado acreditante y con fines señalados en los numerales 1 y 2, de sus agentes diplomáticos y otros representantes oficiales en los asuntos privativos de otro Estado.

En este esfuerzo, el C. J. I. tuvo presente lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y los antecedentes existentes en el Sistema Interamericano, especialmente el Protocolo sobre No Intervención de la Conferencia de Consolidación de la Paz de 1936. Lo que en este caso se tipifica como intervención es que la intromisión de los agentes diplomáticos o

de los representantes oficiales de un Estado, sea imputable al Estado al cual representan y no tan sólo a ellos, y que, además, tal injerencia tenga por finalidad atentar contra la personalidad de otro Estado, o contra sus elementos constitutivos o forzar su voluntad soberana.

17) La acción de un Estado en contravención a la inmunidad de jurisdicción de otro Estado establecida por el Derecho Internacional.

El C.J.I. ha considerado que si un Estado (usualmente a través de sus tribunales) ejerce jurisdicción sobre otro, puede incurrir en violación del principio de no intervención al entrar a juzgar actos que importan una intromisión en los asuntos que son de la competencia de otro Estado. Por otra parte, la circunstancia de que el derecho internacional no ha precisado la extensión que tiene la regla de la inmunidad de jurisdicción del Estado, ha llevado al Comité a preferir no señalar cuáles son específicamente los casos en que un Estado incurre en violación del principio de no intervención como consecuencia del juzgamiento de los actos de otro Estado, optando por señalar, genéricamente, que tal violación se produce cuando se contraviene la "inmunidad de jurisdicción establecida por el Derecho Internacional".

18) La interferencia o presión en partidos políticos, organizaciones sindicales, instituciones y actividades gremiales, destinadas a ejercitarse y cumplirse en territorio de otro Estado, para influir abusivamente en los asuntos privativos de éste.

19) La imposición de sanciones o la adopción de medidas discriminatorias por parte de un Estado contra otro, como consecuencia de actos practicados por éste en el ejercicio de su soberanía.

20) Los actos dirigidos a crear el boicot económico o financiero contra un Estado ya

sea por razones de discrepancia política o por las medidas económicas y sociales que emprenda su gobierno.

El fundamento que ha tenido el C.J.I. para incluir bajo los casos 19 y 20 estas dos situaciones, es el respeto a las legítimas decisiones internas que, en uso de su soberanía, puede realizar un gobierno.

21) El condicionamiento de préstamos, financiaciones o transferencias de tecnología o la adopción por parte de un Estado de medidas extrañas al objeto y modalidades de las negociaciones y que, por ello, configure interferencia indebida en sus decisiones soberanas (OEA, 1974:55-58).

Entre las opiniones discrepantes al método casuista utilizado por el C.J.I. está la del Dr. Americo Pablo Ricaldoni, quien señaló: "La lista de "casos" que el Comité consideró que configuran violaciones al principio de la no intervención nada agrega, en sí misma, a la defensa de tal principio. En efecto, una determinada situación concreta será acto de intervención, no porque coincida con uno de los "casos" votados por el Comité, sino porque encuadra con un determinado concepto jurídico (Ibid:88).

Nosotros opinamos que es correcta la apreciación de que la intervención está configurada por la vulneración de una norma jurídica bien establecida del derecho internacional. Dicha norma impone a los Estados su obligación de cumplirla. Pero esto no desmerece los méritos indiscutibles del Comité, en sus esfuerzos tendentes a definir por medio de un proyecto de instrumento los casos de violaciones del principio de no intervención.

El delegado norteamericano se abstuvo de votar el informe del Dr. Vargas Carreño, a pesar de su calidad, por razones concernientes a los casos de violación del principio de no

intervención, y no por estar en desacuerdo con dicho informe (Ibid: 84). Evidentemente, los EEUU se oponían a un intento de definir la intervención, puesto que si aceptaban el proyecto de instrumento que tipificase los casos de violaciones al principio de no intervención, se estaría obligando jurídicamente a respetar el alcance y la extensión de este principio, lo cual iba en contra de su interpretación unilateral del artículo 15 de la Carta de Bogotá no reformada por el Protocolo de Buenos Aires (1967).

En relación a que sólo un Estado o grupos de Estados pueden violar el principio de no intervención, el Dr. José Joaquín Caicedo Castilla, señaló: "hubiera sido conveniente considerar también los casos de violación de la no intervención de parte de las empresas transnacionales " (Ibid: 77). Asimismo el Dr. Ricaldoni cree que a las empresas privadas no se les puede aplicar el concepto que el derecho internacional tiene de sujeto activo de la intervención, y agrega: "Las actividades reprobables que ellas puedan realizar quizás justificarán la creación de un delito internacional específico que se agregará a los establecidos en los últimos años. Pero entre tanto, sólo podrán ser condenadas o por la moral internacional o por el derecho interno. Lo que no obsta, naturalmente, para recordar que en la práctica pueden ser el instrumento al que recurren los sujetos de la intervención para consumar sus propósitos (Ibid: 92).

Sin embargo, el mismo Ricaldoni reconoce que el otorgamiento de un crédito de asistencia técnica o científica, que fueran condicionados por un organismo internacional afectaría las decisiones soberanas de un Estado, lo cual significaría un acto de intervención (Ibid: 90).

El C.P. de la OEA aprobó la Resolución 143 (158/75), titulada "Estudio de un Proyecto de Instrumento tendiente a definir los casos de violación del Principio de No Intervención".

En dicha Resolución se recomienda a la Asamblea General que someta a los gobiernos de los Estados miembros toda la documentación del C.J.I. sobre los casos de violación al principio de no intervención y a los Estados miembros que formulen sus observaciones sobre los mencionados documentos, teniendo en cuenta también la Resolución AG/Res.78 (II-0/72) (OEA, 1975). La Asamblea General de la OEA mediante la Res. AG/Res. 184 (V -0/75), aprobada en su quinto período ordinario de sesiones celebrado en mayo de 1975, decidió implementar la recomendación hecha por el Consejo Permanente, y señaló a los gobiernos de los Estados miembros un plazo, antes del 30 de septiembre de 1975, para que evacuaran sus observaciones. Por otra parte, en el párrafo 4 de la citada Resolución, se solicitaba del C.P. que, a la luz de las observaciones de los gobiernos, preparase un estudio sobre el tema, requiriendo, si lo considerase conveniente, que el C.J.I. reexaminara sus documentos, teniendo en cuenta estas observaciones y le sometiera un informe sobre el asunto (OEA, 1976:3-4).

El Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (C.A.J.P.), expresó que, dada la complejidad de la materia, la Comisión no tendría tiempo de preparar, antes del sexto período de sesiones de la Asamblea General, dicho estudio, y que sería mejor que lo preparase el C.J.I.. El representante de México manifestó que, mientras no se terminase el estudio que se estaba realizando sobre todos los aspectos de la reforma de la Carta, no parecía aconsejable que el C.P. llevase adelante el mencionado estudio. El representante mexicano expresó también que el tema relativo a los casos de violación al principio de no intervención debería ser objeto de un examen adecuado tan pronto como se terminase todo lo referente a la revisión de la Carta. Y que sería conveniente esperar la Ratificación del Protocolo de Reforma al TIAR, antes de pretender definir o precisar

violaciones al principio de no intervención (Ibid: 5). Se acordó dejar el tema entre los asuntos pendientes de la C.A.J.P. e informar a la Asamblea General al respecto.

En su sesión celebrada el lro. de mayo de 1985, el C.P. consideró el informe de la C.A.J.P. sobre esta materia (CP/Doc.19596/85), además aprobó la Res. CP/Res. 424(612/85) que reproducía íntegramente la Res. 2625 (XXV) de la Asamblea de la ONU mediante la cual se reafirmaba el principio de no intervención consagrado en los artículos 18 y 19 de la Carta de Bogotá. También se aprobó el citado informe de la C.A.J.P. para someterlo a la consideración del décimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General (OEA, 1985d:18). En esta sesión del lro. de mayo, los representantes en el C.P. resolvieron que elaborar una lista de Casos, antes que fortalecer el principio, podría debilitarlo y recomendaron la importancia de que se estudiaran medidas y procedimientos encaminados a hacerlo efectivo. En este orden de ideas el gobierno de Colombia propuso que las violaciones graves al principio de no intervención sean sancionada con la suspensión de los derechos de cualquier Estado miembro de la OEA y aún con la expulsión en los casos de persistencia. Esta norma, por supuesto, vendría a llenar un vacío en la Carta, ya que en ella no aparecen reglamentados los casos de suspensión o exclusión a los Estados Miembros, como lo están en la Carta de la ONU. La propuesta colombiana de suspender o expulsar a los países miembros de la OEA, que quebranten en forma grave los principios fundamentales de la Carta o de otros instrumentos del sistema Interamericano (TIAR), fue desechada en la XIV Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada en el mes de diciembre de 1985 (Cartagena Colombia), ya que sería aplicable solo a los países pequeños y débiles y, como bien dice el Prof. Antonio Remiro Brotons sobre la exclusión de Cuba de la Organización: "Con todo, es cierto que la

falta de una previsión expresa de la competencia de la Organización en este punto fomenta un equivoco, una ambivalencia, que resulta despejada en cada momento por el libre juego de las fuerzas políticas en acto, no en forma necesariamente coherente con los presupuestos de que parten y los antecedentes que los avalan" (Remiro, 1972:167). Opinamos que es cierto que tal juego no es tan libre, ya que la presión del Estado-hegemónico, urgiría la adopción de esa medida de exclusión, tal como en efecto sucedió con Cuba. Nos preguntamos si, siendo hegemónica la presencia de los EEUU en la Organización, por la sola existencia de un poder extremadamente desigual, los Estados miembros de la misma estarían dispuestos a excluirle en caso de violaciones gravísimas de los propósitos y principios establecidos en la Carta. Es obvio que no. De ahí que fuera correcto no incluir dicha propuesta colombiana en la Reforma de la Carta de la OEA en Cartagena.

En el informe de la C.A.J.P. sobre el examen del Informe anual del C.J.I. a la Asamblea General, en cuanto a la tipificación de casos de intervención, se dice que el Presidente del C. J. I. acababa de conocer que la C. A. J. P. había resuelto que la OEA no debía hacer nada. El C.J.I. buscaba hacer posible que los Estados miembros de la OEA negociasen una enumeración de casos indiscutibles en que habría intervención. El presidente del C.J.I. comprendía que en dicha negociación había razones de orden jurídico y político y que el trabajo del C.J.I., al tipificar los casos de intervención, lo había hecho sobre todo desde el punto de vista jurídico, aunque al proponer aquella negociación, el C.J.I. no dejaba de considerar aspectos políticos. Nos preguntamos, ¿qué era lo que había como paralelo a este proyecto de instrumento tendente a definir los casos de violación del principio de no intervención? En nuestra opinión, es el artículo 9 del TIAR (párrafo 2) que quedaría reformado por el artículo 1 del Protocolo de

Reformas al TIAR, firmado en San José el 26 de julio de 1975, el cual había incorporado la definición de agresión anexa a la Res. 3314 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU y que enumeraba los casos de agresión. No había entonces razones jurídicas que impidieran la tipificación de los casos de violación del principio de no intervención. Aunque motivos políticos de los Estados sí lo impidieron. Además, la Conferencia de Plenipotenciarios reunida en San José, había adoptado el Protocolo de Reformas al TIAR, con un criterio enumerativo y no exhaustivo, ya que el párrafo 3 del referido artículo 9 del TIAR reformado, indicaría que el Organo de Consulta podría determinar qué otros casos concretos sometidos a su consideración, equiparables por su naturaleza y gravedad a los contemplados en aquel artículo, constituían agresión, con arreglo a las disposiciones de las Cartas de la ONU o de la OEA o del TIAR. Si se había adoptado la tesis de encontrar una enumeración para definir la agresión la pregunta era: ¿por qué no encontrar una enumeración para definir la intervención? La aludida enumeración era la que el C.J.I. había recomendado que fuese negociada (OEA, 1985e:19-20).

El C.J.I. tenía razón al sentirse incómodo con lo que el C.P. había hecho cuando había visto el proyecto de instrumento sobre casos de intervención. Uno de los motivos por los cuales el C.P. había suspendido el estudio de un proyecto de instrumento tendente a definir los casos de violación del principio de no intervención, era que la Asamblea General de las Naciones Unidas ya había aprobado la Res. 2625 (XXV). En esta Resolución, la Asamblea había incluido el principio de no intervención tal y como se establecía en la Carta de la OEA (Artos. 18 y 19), aunque hubiera sido también interesante que la OEA aprobase el proyecto de instrumento que tipificaba los casos de violaciones del principio de no intervención como las Naciones Unidas había hecho con la definición de la "agresión".

En conclusión, el dictamen del C. J. I. (1974) completaba su anterior dictamen de 1959, elevando de 12 a 21 los casos de violaciones del principio de no intervención. Esta lista de casos que violaban la no intervención tenía el carácter enumerativo y no exhaustivo, ya que el Organo de Consulta (Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Americanos) podía tipificar nuevos casos. Es relevante, destacar que los numerales 1 y 2 del proyecto de instrumento que tipifica los casos de violaciones al principio de no intervención, se tomaron de los Artos. 18 y 19 de la vigente Carta de Bogotá, que prohibía a un Estado o grupo de Estados intervenir directa o indirectamente, o atentar contra la personalidad del Estado o sus elementos políticos, económicos, sociales y culturales. También se prohibía a los Estados "el uso de la fuerza" y la aplicación o estímulo de medidas coercitivas de carácter económico, político o de cualquier otra índole.

Ambas situaciones tendían a forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Los numerales 3, 4 y 5 del proyecto de instrumento de no intervención, hacían referencia a las maniobras militares, cuyo "propósito intimidatorio" tipificaba el acto de intervención. El tipo de maniobra y las circunstancias o las relaciones existentes entre el presunto interventor e intervenido determinarían si existía o no dicho "propósito intimidatorio". El numeral 6 prohibía a los Estados, la organización, apoyo, fomento, financiamiento, instigación o tolerancia de actividad armada, subversiva, o terrorista que tuviesen efecto en otro Estado, así como la participación en una guerra civil extranjera. Este numeral 6 estaba tomado de la parte dispositiva de la Res. 2131 (XX), párrafo 3, parte segunda, y al decir "que tengan efecto en otro Estado," se entendía dicho término, como que las actividades terroristas estaban encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otros Estados. Asimismo, esta parte dispositiva de la Res.

2131 (XX) de la Asamblea de la ONU estaba también incluida en la Res. 2625 (XXV) de la ONU, la cual en su sección sobre "El principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta", prohibía a los Estados organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado. Los numerales 7 y 8 consideraban intervención los actos por los que un Estado se opone a que en otro prevalezca determinada forma o composición de gobierno o se hicieran efectivas las transformaciones socio-económicas que éste emprenda. Además, se calificaba de intervención los actos de coacción que tiendan a imponer a otro Estado una organización o un gobierno determinado. Opinamos que estos numerales 7 y 8 también se corresponden con el párrafo de la Res. 2625 (XXV), que dice: "Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado".

Además los numerales 19 y 20 calificaban de intervención, la imposición de sanciones, la adopción de medidas discriminatorias, y los actos dirigidos a crear el boicot económico o financiero contra un Estado por motivos de discrepancia política o por las medidas económicas y sociales que emprenda su gobierno. Nosotros compartimos con el C. J. I. el criterio utilizado para incluir estas dos situaciones mencionadas, tomado en cuenta el respeto a las legítimas decisiones internas que, en uso de su soberanía, puede realizar un gobierno (OEA, 1975a:74). Sin embargo, el C.P. de la OEA en su sesión celebrada el 1ro. de mayo de 1985, decidió suspender el estudio de un proyecto de instrumento tendente a definir los casos de violación del principio de no intervención y en su lugar se aprobó la Res. CP/Res. 424(612/85), que ratificaba íntegramente la Res. 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su Sentencia del 27 de junio de 1986 sobre las actividades militares y paramilitares de los EEUU en y contra Nicaragua (Párrafos 202-204), había señalado que el principio de no intervención pone en juego el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin injerencia externa; y que se podían encontrar numerosas expresiones de una Opinión Juris de los Estados sobre la existencia de este principio. La Corte observó que el principio de no intervención afirmado en su jurisprudencia (Caso de Corfú) había sido retomado en las declaraciones y las resoluciones adoptadas por las organizaciones o conferencias internacionales, en las cuales participaron los EEUU y Nicaragua, y que se podía considerar que las mismas eran un testimonio de la

aceptación, por los países mencionados, de un principio consuetudinario universalmente aplicable. La Corte mencionó a este respecto la Res. 2625 (XXV) de la Asamblea de la ONU, que recoge lo esencial de la Res. 2131 (XX) de la Asamblea; dentro del Sistema Interamericano, citó la Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los Estados (26 diciembre de 1933), en la que los EEUU declararon su oposición a "la interferencia a la libertad, soberanía y asuntos internos de los gobiernos de otras naciones"; recordó la ratificación por los EEUU del Protocolo Adicional relativo a la No Intervención (23 de diciembre de 1936), y las Resoluciones AG/Res. 78 y AG/Res. 128 de la Asamblea General de la OEA (Corte Internacional de Justicia, 1986:106-107).

Alcance de la No Intervención

Nos proponemos en este punto abordar el examen del concepto mismo de la intervención, tomando como referencia los trabajos del Comité Especial de la ONU y su resultado, la Res. 2625 (XXV), y los trabajos del C.J.I. hacia un proyecto de instrumento que tipificase el mayor número posible de aquellos casos que constituyen violaciones del principio de no intervención, y su resultado, la Res.(CP/Res. 424 (612/85), que ratifica íntegramente la Res 2625 (XXV). Asimismo, analizaremos desde el punto de vista del derecho internacional convencional y del derecho internacional consuetudinario, la proscripción del principio de no intervención - aunque algunos autores de derecho internacional y en determinadas circunstancias históricas la política de los EEUU, se arroguen un pretendido derecho de intervención; particularmente en el caso nicaragüense con la "Doctrina Reagan", para justificar las operaciones militares y paramilitares de los EEUU en y contra Nicaragua, que bajo la luz de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (C.I.J.), del 27 de junio de 1986, son condenadas con esta conclusión: "el derecho internacional contemporáneo no prevé un derecho general de intervención en favor de la oposición existente en otro Estado" (Corte Internacional de Justicia, 1986:109). Un sinnúmero de resoluciones de la ONU, como la 2131 (XX), la 2625 (XXV) y la 3314 (XXIX), y en la Carta de Bogotá (1967), los artículos 18 y 19 proscriben la intervención en forma absoluta.

Comenzaremos diciendo que la intervención es la injerencia, intromisión imperativa por vía de autoridad de un Estado en los asuntos de otro por medio de la fuerza, normalmente la fuerza armada directa o indirecta, para obligarle a que adopte una política que esté en conformidad con los deseos del Estado que

interviene (Paenson, 1983). Actualmente, una de las formas de intervención consiste en el uso de presiones económica, políticas y de otra índole para coaccionar a otro Estado con el fin de subordinar el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. La Sentencia sobre este aspecto dice:

"Que el principio de no intervención prohíbe a todo Estado o grupo de Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de los Estados. En virtud del principio de soberanía del Estado, éste puede decidir libremente su sistema político, económico, social y cultural y la formulación de su política exterior" (Corte Internacional de Justicia, 1986).

La intervención es absolutamente ilegal después de la adopción de la Carta de Bogotá, pero incluso lo era antes de la fundación de la ONU (OEA, 1962). Aunque se admitían algunas excepciones, como por ejemplo la intervención del Estado protector en los asuntos del Estado protegido, o la intervención humanitaria que tenía por finalidad obligar a un Estado a que cesara la persecución contra determinadas categorías de sus nacionales normalmente minorías nacionales o religiosas.

El artículo 22 de la Carta de la OEA (1967) diferencia la intervención multilateral y la acción colectiva: "Las medidas que se adopten para el mantenimiento de la paz y la Seguridad no constituyen violación de los principios enunciados en los artículos 18 y 20". En relación a la excepción contenida en este artículo, es necesario saber diferenciar la intervención unilateral o multilateral de la acción colectiva: la intervención multilateral es una alianza ilícita en América para

desconocer los derechos de uno o más Estados. En cambio la acción colectiva tiende siempre a restaurar el derecho violado y a reparar el agravio inferido a toda una Organización Internacional. La acción colectiva defiende a todos los Estados miembros de la Organización, porque cualquiera puede recurrir a ella cuando sus derechos son quebrantados. Y cuando en determinada situación se defienden estos derechos, se están resolviendo hipótesis que convienen a todos los Estados. Si por ejemplo se trata de detener una agresión, los Estados que defienden al país agredido en realidad se protegen así mismos; porque la agresión consumada contra uno de éstos, podría mañana volverse contra los demás. Pero si se contiene al agresor, los Estados garantizan su propia existencia y soberanía. En cambio, la intervención va a favorecer sólo a aquellos que la organizan y la ejecutan (OEA, 1985b:3-4).

En el Protocolo de Cartagena de Indias (1985) se incluye en el artículo 1ro. el siguiente párrafo: "La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros" (Idem.).

Este artículo se corresponde con el artículo 2do. párrafo 7 de la Carta de la ONU (primera parte) que expresamente señala la no intervención por parte de la ONU en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados. Asimismo, al artículo 2, de la Carta de la OEA, se le adicionó en dicho Protocolo de Cartagena lo siguiente: "Promover y consolidar la democracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención" (Idem.). Con respecto al artículo 3 de la Carta de la OEA, se le incluyó un párrafo adicional: "Todo Estado tiene derecho a elegir, sin interferencias externas, su sistema político, económico y social y a organizarse en la

forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado ". Se ratifica en el Protocolo de Cartagena al igual que en el Protocolo de Buenos Aires, el principio de no intervención en los Artos. 18 y 19.

El dictamen, preparado por el C. J. I en cumplimiento de la Resolución XIV de la V Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, señala que la intervención es una acción arbitraria, que implica la violación de derechos fundamentales del Estado, tales como la soberanía e independencia de cada uno y la igualdad jurídica con los demás; que la intervención es ilícita, puesto que es contraria al derecho; que la intervención significa un agravio para el Estado que la experimenta. Para los tratadistas clásicos, los motivos con los que se pretende justificar una intervención son eminentemente políticos.

Así por ejemplo, Emerich de Vattel acepta la intervención solicitada en virtud de un tratado: "Un Estado soberano no puede ser molestado por otro, a no ser que él mismo, por medio de tratados, le haya dado facultad de inmiscuirse en sus asuntos" (De Vattel, 1883:22). Oppenheim Lauterpach aceptaba una excepción del principio general de no intervención cuando se "trataba de proteger a sus nacionales en el extranjero"(Oppenheim-Lauterpach, 1948:280). Autores norteamericanos, como Ellery C. Stowell, aceptan la intervención para obtener reparación "cuando un Estado o sus nacionales sufren perjuicios de parte de otros Estados"(Stowell, 1932:95).

En los trabajos del Comité Especial de la ONU y del C.J.I.I. que hemos examinado antes, se consideraban como intervencionistas los actos de terrorismo y los actos de fuerzas armadas irregulares, bandas armadas y mercenarios, coerción política, diplomática o económica, financiamiento y apoyo a dichas fuerzas.

En los casos de las intervenciones tradicionales, cuando un Estado interviene en los asuntos de otro que ha dado su consentimiento, podría parecer que no hay intervención al desaparecer el elemento imperativo; sin embargo, existe intervención aunque ésta sea solicitada, ya que el Estado intervenido sufre menoscabo en algunos de sus derechos fundamentales, además de que bajo este pretexto se estaría escudando un gobierno impopular, ilegítimo, para que acuda un Estado o varios Estados en su ayuda a restaurar "el orden político interno". La afirmación de un derecho de intervención tendría siempre como interventores a los países fuertes y como intervenidos a los países débiles, por lo que debe ser rechazado. Según el Dr. Isidro Fabela: "Si existe una verdadera compenetración de voluntades entre dos o más Estados para que alguno de ellos intervenga en otros casos determinados previamente, la intervención estará justificada. Lo que faltaría saber es si la contratación respectiva fue llevada a cabo en plena libertad de parte de todos los contratantes. Porque el quid del problema sería éste: los gobiernos que de antemano aceptan la intervención en sus Estados ¿obraron libremente, o por efecto de una fuerza exterior? En el primer caso las intervenciones serían justificadas y en el segundo no" (Fabela, 1958:50).

Ejemplos de tratados con vicios de nulidad que no justifican la intervención son la Enmienda Platt y el Tratado Chamorro Bryan. Ejemplos de tratados que justifican la intervención son la Carta de San Francisco y la Carta de Bogotá y el TIAR en lo referente a la paz y a la seguridad en materia de seguridad colectiva. Asimismo, cuando la intervención se produce con el fin de proteger a los nacionales del Estado interventor, cuando un Estado o un particular sufre perjuicio de parte de otro Estado, y cuando se producen las intervenciones de humanidad, estamos ante puros pretextos de los Estados más fuertes, quienes se constituyen por sí y ante sí en jueces que no oyen ni acatan el imperio de la soberanía e independencia ajena, para imponer su propio albedrío, antijurídico e inapelable. Históricamente estos motivos de intervención conferían una pantalla de legalidad a las grandes potencias, como bien dice el Dr. Antonio Remiro Brotons: "Las intervenciones lícitas han servido en el pasado para conferir una pantalla de legalidad o, al menos, de cierta respetabilidad a comportamientos lesivos de la independencia de los Estados que las padecían" (Remiro, 1972:84-85).

Intervención legal e ilegal

En el informe de la VI Comisión de la ONU (Documento A/6165), en relación a "la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta", se dice que era urgente definir la intervención y algunos representantes surgieron varias definiciones. Entre las que más sobresalen están todo tipo de presión, incluidas la económica, la política y la diplomática. Una delegación subrayó la necesidad de establecer una clara distinción entre el principio de la no intervención y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, cuya violación autorizaría el ejercicio del derecho a recurrir a la fuerza en defensa propia, individual o colectiva. Sin embargo, otros representantes consideraron el uso de la fuerza como una forma de intervención .

Se consideró también la necesidad de establecer una distinción entre formas de intervención legales e ilegales. Como ejemplos de formas legales, se mencionó la intervención autorizada por una decisión de un órgano competente de las Naciones Unidas; la intervención para restaurar la dignidad de la persona humana, cuando fuera necesaria por la denegación o la violación de los derechos humanos, o la que tuviera por objeto liberar a las poblaciones que aún se encontraran bajo dominio extranjero; y la intervención en ejercicio de un derecho, conferido por un tratado o la realizada atendiendo a una petición oficial del gobierno del Estado interesado .

Muchos representantes declararon que las actividades contra el sistema político, económico o social de un Estado o contra su soberanía o integridad territorial, así como los intentos de imponer a un Estado una forma concreta de organización o de gobierno constituyen una intervención ilegal. Otros negaron el derecho de un Estado a intervenir

individual o colectivamente para impedir la difusión de una ideología o de un sistema económico y social determinado. Muchos representantes subrayaron también que el apoyo a las actividades subversivas, al terrorismo o a los grupos sediciosos, o a la incitación a la rebelión en otro Estado, son contrarios al derecho internacional, como también lo son la ayuda prestada a fuerzas que se dediquen a realizar incursiones en los territorios de otros Estados .

Al adoptarse la Res. 2625 (XXV) de la Asamblea de la ONU, se dilucidaba de una vez por todas la posibilidad de una intervención por los motivos clásicos - humanistas, ideológicos, de seguridad nacional- ya que los artículos 18 y 19 de la Carta de Bogotá contenidos en la Resolución 2625 (XXV) prohibían en términos absolutos la intervención.

Más aún, la Resolución del C.P. de la OEA (CP/Res.424 (612/85) recogía íntegramente el contenido de la Res. 2625 (XXV) de la ONU. Las únicas excepciones al principio de no intervención son la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado y hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales (Art. 51 y Art. 2do. párrafo 7 de la Carta de la ONU y medidas coercitivas contempladas en su Capítulo VII y Art. 22. de la Carta de Bogotá y medidas adoptadas para el mantenimiento de la paz).

La Sentencia de la C. I. J. del 27 de junio de 1986 dice que la intervención es ilegal y que ésta utiliza la coerción para impedir a un Estado elegir libremente su sistema político, económico, social, cultural y la formulación de su política exterior (Corte Internacional de Justicia, 1986:108).

¿Existencia de un derecho de intervención?

Ellery Stowell (1931) era partidario, como otros autores norteamericanos de su época, de un derecho de intervención por razones humanitaria. Stowell definió la intervención humanitaria como un legítimo uso de la fuerza, por motivos de protección de los ciudadanos de un Estado, del tratamiento arbitrario y constantemente abusivo, que excedía el límite por el cual el soberano estaba autorizado a actuar con razón y justicia (Stowell, 1931:349).

Añade Stowell que muchas autoridades reconocieron la legalidad de la intervención humanitaria, tales como Grotius, Wheaton, Heiberg, Woolsey, Bluntschli, Westlake y otros. Aún más, Stowell estaba de acuerdo con Teodoro Roosevelt cuando dijo en 1904: "El error brutal, o la impotencia, que resulta de la general pérdida de los lazos de la sociedad civilizada finalmente requeriría la intervención de alguna nación civilizada, en el hemisferio occidental, los Estados Unidos no pueden ignorar su responsabilidad" (Ibid: 350-351).

Esta posición, partidaria de un derecho de intervención por motivos de humanidad, tenía lugar antes de la Sociedad de Naciones y del Sistema de las Naciones Unidas (1945) y estaba dirigida a justificar el derecho de intervención por parte de los EEUU en los Asuntos internos de los países americanos. Así, Teodoro Roosevelt elaboró su política del "Big Stick", profundamente intervencionista, con la cual ocupó por la fuerza Haití, Santo Domingo, Cuba, Honduras, México y Nicaragua. Asimismo, Charles Evans Hughes (1928), en la VI Conferencia de La Habana, defendió los intereses de EEUU, es decir, la doctrina de que un gobierno puede con justicia tomar las medidas necesarias para proteger la vida de sus nacionales y la de sus bienes (D'Escoto, 1984:108).

Con el sistema de las Naciones Unidas (1945), la intervención está proscrita absolutamente según la Carta de San Francisco en el artículo 2do., párrafo 1 y párrafo 4. También lo está en el Sistema Interamericano según la Convención de Montevideo sobre derecho y deberes de los Estados (26 de diciembre de 1933), el Protocolo de Buenos Aires relativo a la No Intervención (23 de diciembre de 1936), la Carta de Bogotá (1948) y la Carta de Bogotá reformada por el Protocolo de Buenos Aires (1967) en los artículos 18 y 19. También prohíben la intervención las Resoluciones 2131 (XX), 2625 (XXV) y 3314 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU, las Resoluciones AS/Res. 78 y AG/Res.128 de la Asamblea General de la OEA y la Resolución (CP/Res. 424 (612/85) del C.P. de la OEA. Sin embargo, a pesar de la tesis de la proscripción absoluta de la intervención en los asuntos internos o externos de los Estados incorporada al derecho internacional público contemporáneo, "la Doctrina Johnson" (1965) pretendió justificar la intervención unilateral directa de los EEUU en Santo Domingo, al decir: "Las naciones americanas no pueden, no deben y no quieren permitir el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio: una revolución en un país cualquiera es de la exclusiva incumbencia de ese país. Pero se transforma en un asunto que requiere una acción hemisférica cuando sus fines son el establecimiento de una dictadura comunista".

La "Doctrina Reagan" fue definida por el expresidente Reagan con estas palabras. "Creo en el derecho de un país a recurrir a acciones encubiertas siempre y cuando considere que éstas sirven a sus propios intereses" (OEA, 1983:174-176). La "Doctrina Reagan", como las ya mencionadas, constituye una violación del principio de no intervención, reduce a un simple formulismo la

ley, el derecho y la justicia internacional. Sobre la base de estas presuntas doctrinas, que eran más bien declaraciones políticas, la independencia y soberanía de las naciones son meras ficciones y no realidades jurídico políticas. Antonio Remiro Brotons señala: "La afirmación de un derecho de intervención, aún condicionado, tendría siempre como titulares a los fuertes y como sujetos pasivos a los débiles, por lo que debe ser rechazado. El Derecho internacional no podría orientarse a la legitimación de los atentados a la independencia y a la igualdad soberana de los Estados abriendo el portillo a determinadas formas de intervención" (Remiro, 1972:85).

En relación al caso del Canal de Corfú, cuando un Estado alegó un derecho de intervención para lograobtener prueba en el territorio de otro Estado, y presentarla a un tribunal Internacional (I.C.J. Reports 1949, p. 34), la Corte dijo: "El derecho alegado de intervención como la manifestación de una política de fuerza, tal como tiene lugar en el pasado, ocasionando los más serios abusos, no puede tener lugar en el derecho internacional cualquiera que sean los defectos de la Organización Internacional, pues reservada por la naturaleza de las cosas a los Estados más poderosos podría conducir a desnaturalizar la administración de justicia internacional (Corte Internacional de Justicia, 1986:107).

También la Corte consideró, sobre la Naturaleza de la no intervención, que un derecho general de intervención implicaría una

modificación fundamental del principio de derecho internacional consuetudinario de no intervención. La Corte, mencionando el caso North Sea Continental Shelf, señaló que para la formación de una nueva regla consuetudinaria la acción debe referirse "a una considerable práctica observada" y además debe estar acompañada dicha acción por la Opinio Juris sive necessitatis, es decir, la evidencia de una convicción de que esta práctica es interpretada obligatoria por una regla de derecho. Esto es la existencia de un elemento subjetivo implícito en la noción de dicha Opinio Juris (I.C.J. Reports 1969, pp. 44, Para. 77) (Idem.,108-110). Sigue la Corte diciendo que los Estados Unidos no justificaron su conducta en referencia a un nuevo derecho de intervención o a una nueva excepción al principio de su prohibición. En algunas circunstancias, los EEUU declararon su fundamento para intervenir en los asuntos de un Estado con motivos relacionados, por ejemplo, con la política interna, ideología, nivel de armamento o la dirección de la política exterior del Estado intervenido. Pero esas declaraciones de los EEUU eran declaraciones de política internacional y no una afirmación de reglas de derecho internacional. Por lo tanto, la Corte agregó que los EEUU tendrían justificada la intervención en el plano legal solamente a través de la legítima defensa colectiva contra un ataque armado. La Corte concluye diciendo: "Un derecho general de intervención en apoyo de la oposición en otro Estado, no existe en el derecho internacional contemporáneo" (Idem.).

Conclusiones

En nuestro concepto, el término intervención estaría dado cuando un Estado o grupo de Estados por acciones u omisiones tendentes a coacer la voluntad de otro Estado a través de la amenaza o uso de la fuerza armada directa o indirecta, o aplicando o estimulando medidas coercitivas de carácter económico y político, violatorias de la integridad territorial, soberanía, personalidad e independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma y sea cual fuere el motivo, intervenga en los asuntos, internos o externos de un Estado.

La intervención puede provenir de un Estado y/o grupos de Estados (individual o colectiva); por acción u omisión: por ejemplo, aplicando la fuerza al Estado intervenido u omitiendo reconocer gobiernos nuevos; por la amenaza o el uso de la fuerza, aplicación o estímulos de medidas coercitivas o cualquier otra forma como podría ser intervenciones abiertas, ocultas o encubiertas, por la vía diplomática y/o por la fuerza armada directa del ejército de un Estado, o indirecta a través de grupos irregulares, bandas armadas y mercenarios, para derrocar a un gobierno legítimo e impedirle elegir libremente su sistema económico, político social o cultural. Estos son algunos elementos que caracterizan la intervención. Por otro lado, tanto el financiamiento como el suministro de armas, el entrenamiento, etc., de grupos irregulares, son incompatibles con el Principio de No Intervención. Por el contrario, el Principio de No Intervención implica el derecho de la soberanía de todos los Estados para conducir sus asuntos sin interferencias externas. La C.I.J. en su Sentencia del 27 de junio de 1986 observó: "Entre Estados independientes, el respeto de soberanía territorial es una base esencial de las relaciones internacionales y el derecho internacional requiere que la integridad política también sea

respetada" (Ibid: 106). Además, la Corte señaló que con su apoyo a los Contras los EEUU intentaban coacer al gobierno de Nicaragua con respecto a los asuntos en los cuales cada Estado tiene derecho, por el principio de la soberanía de Estado, a decidir libremente; y que la intención de los Contras era derrocar al actual gobierno de Nicaragua (Ibid: 124). En conclusión, la intervención está proscrita absolutamente. En el derecho internacional convencional y consuetudinario no existe pues un pretendido derecho de intervención, como el esgrimido por la denominada "Doctrina Reagan". Y como muy bien señala Foderé Pradier: "No hay y no puede haber derecho de intervención, pues no hay derecho contra el derecho. El derecho es la independencia respectiva de los Estados; la intervención es la violación de la independencia" (Pradier, 1922:565).

¿Y qué decir sobre el caso más reciente de la participación de la OTAN en la crisis de Kosovo? Después de 11 semanas de bombardeos por parte de la OTAN en el escenario del conflicto, se logró superar con la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, por 14 votos a favor y 1 abstención de la República Popular de China, la crisis por inactividad de la ONU en la cuestión de Kosovo. Pareciera que se está gestando un nuevo derecho de intervención por razones humanitarias en protección de víctimas de una limpieza-étnica o por crímenes masivos. Con el sistema de las Naciones Unidas (1945), la sociedad internacional postula una concepción distinta del derecho internacional. Es la concepción del derecho internacional contemporáneo que se caracteriza por ser de carácter social, institucionalizado y democrático, en el cual la intervención está proscrita absolutamente según la carta de San Francisco, en el Arto. 2, párrafo 1 y párrafo 4, que permite el uso de la fuerza sólo en caso de legítima

defensa individual o colectiva, frente a un ataque armado o acto de agresión y de conformidad con el capítulo VII de la Carta de la ONU.

El caso de Kosovo replantea este principio de tanto arraigo en el derecho internacional contemporáneo que consagra el deber de no intervención en los asuntos internos o externos de otro Estado. Se trataría de exceptuar de su ámbito de aplicación los casos-límite de atentados masivos a los derechos humanos, a las llamadas intervenciones humanitarias, postulando incluso un deber de injerencia o intervención en tales casos. Se correría el riesgo de convertirlo en instrumento de cobertura de la política de poder hegemónico, impregnado, por tanto, del estigma de la doble moral o el doble estándar.

Hay que luchar porque se respeten los derechos humanos frente a sus violadores sean quiénes sean y en cualquier parte, evitando las masacres étnicas, pero todo dentro de los mecanismos pacíficos de arreglos de las controversias que el propio derecho internacional establece para ello. Los bombardeos al margen de la Carta de las Naciones Unidas y de los Principios Consuetudinarios y Normas de Ius Cogens del derecho internacional, no coadyuvan a construir el nuevo orden internacional que reclamamos los países pobres y subdesarrollados finalizando el milenio.

El caso Milosevic ya está siendo considerado por la sala creada por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz y la tendencia moderna es poner en vigencia el tribunal permanente penal internacional para juzgar esos crímenes evitando la impunidad de los mismos. Se trata de globalizar la justicia por encima de las normas nacionales de soberanía y en pro de la universalización de los Derechos Humanos y Humanitario.

El caso de Pinochet plantea por su parte otro tema interesante. Se trata de la contraposición de la jurisdicción extraterritorial con el de la soberanía territorial, para que pueda ser juzgado en España por delitos de lesa humanidad por supuestos actos de genocidio, tortura y terrorismo, sin que pueda argumentarse la inmunidad de jurisdicción.

Se argumenta en la resolución emitida por el Juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, que "Los hechos relatados en esta resolución podrían ser constitutivos respecto del imputado Augusto Pinochet Ugarte, de un delito de genocidio, que se integra por una serie de detenciones ilegales seguidas en unos casos de asesinato o desapariciones de las 91 personas víctimas que se relacionan, y que según los testimonios y datos obrantes en la causa fueron precedidos de torturas en cada uno de los casos... Todos éstos estaban tipificados como delitos en el Código Penal vigente Español en el momento de ocurrir los hechos."

Asimismo, la calificación jurídico-penal de los hechos se apoya en un sinnúmero de normas internacionales que son aplicables en el Reino Unido. Entre tales normas figuran: el Convenio de las Naciones Unidas de 9 de diciembre de 1948 contra el genocidio; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 16 de diciembre de 1966; la Convención contra la Tortura de la ONU de 10 de diciembre de 1984 y el Convenio Europeo sobre Represión del Terrorismo de 27 de enero de 1977.

Según tales disposiciones, los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, sus responsables no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener estatuto de refugiados, ni asilo político, y todos los Estados del mundo están obligados a perseguirlos y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados.

El día miércoles 24 de marzo de 1999, la Cámara de los Lores dejó la puerta abierta para que Pinochet sea extraditado a España, pero sólo sobre la base de denuncias de torturas posteriores a diciembre de 1988, ya que Gran Bretaña había ratificado el 8 de diciembre de ese mismo año, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor para ese país el trigésimo día a partir de dicha fecha.

El día jueves 15 de abril de 1999, el Ministro del Interior Británico, Jack Straw, accedió al pedido de extradición de la justicia española. En consecuencia, continúa adelante el procedimiento de extradición y la decisión de los

Lores sienta el precedente de que no hay impunidad para los Jefes de Estado cuando se cometen crímenes contra la humanidad ni actos de torturas.

Todos estos temas de actualidad, como también el de la regionalización y la integración como respuesta al fenómeno de la globalización, están produciendo hondos repercusiones en el derecho internacional y obligando a los gobiernos a desempolvar y poner al día viejas doctrinas del derecho internacional, como la de la soberanía, la del reconocimiento de Estados, de Sucesión de Estados, la autodeterminación, la inmunidad diplomática y el derecho comunitario, entre otras.

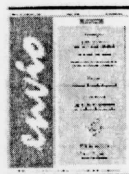
Bibliografía

- CAICEDO, J. (1970). *El Derecho Internacional en el Sistema Interamericano*. Madrid. Ed. Cultura Hispánica.
- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA (1986). *Military and paramilitary activities in and against Nicaragua*.
- D' ESCOTO, M. (1984). *Intervención del Ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua en la XI Asamblea General Ordinaria de la OEA* (OEA/Ser. X.O.2, Vol. II, parte I.)
- DE VATTEL, E. (1883). *Le droit des gens ou Principes de la Loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires de nations et des Souverains*. Paris. Guillaumin et Cie-libraires.
- ESPADA, M.A. (1971). "Comité especial de los principios de amistad y cooperación entre los Estados: sus trabajos y resultados", en *Rev. Española de Derecho Internacional (REDI)* Vol. XXIV. No.1-2.
- FABELA, I. (1958). *Intervención*. México. Universidad Nacional Autónoma. Primera Edición.
- OEA (1962). Ser. F/II.8 doc.
- OEA (1972). Ser. P/II-0.2. Actas y documentos Vol. II.
- OEA (1974). Ser. G CP/Doc. 388/74. Consejo Permanente.
- OEA (1975a). Ser. P AG/Doc. 546/75. Asamblea General.
- OEA (1975b). Ser. G CP/RES. 143 (158/75). Resolución del Consejo Permanente.
- OEA (1976). Ser. G CP/Doc. 551/76 rev.1. Consejo Permanente.
- OEA (1983). Ser. P/XIII 0.2, Vol. I, parte I.
- OEA (1985a). Ser. P AG/Doc. 13 (XIV-E/85). Cor. Asamblea General.
- OEA (1985b). Ser. P AG/Doc. 13 (XIV-E/85). Asamblea General.
- OEA (1985c). Ser. G CP/RES. 424 (612-85).
- OEA (1985d). Ser. G CP/Doc. 1601/85 rev.1. Consejo Permanente.
- OEA (1985e). Ser. G CP/Doc. 1602/85 rev. 1. Consejo Permanente.
- ONU (1960). Asamblea General de la ONU. Resolución 2131(XX). Vigésimo período de sesiones. Suplemento N. 14 (A/6014), p. 13.
- ONU (1965a). Primera comisión 1396ª. Sesión. A/C.1/SR. 1352-1426, p. 264.
- ONU (1965b). Sesión plenaria 1408. A/PV. 1385-1408, p. 15.
- ONU (1966). Asamblea General de la ONU. Vigésimo primer período de sesiones. Sexta comisión, 939ª. A/C.6/SR. 899-955, p. 261.
- ONU (1970a). Asamblea General de la ONU. Vigésimo quinto período de sesiones. Sexta comisión 1180ª. A/C.6/SR. 1176-1244.
- ONU (1970b). Asamblea General de la ONU. Vigésimo quinto período de sesiones. Suplemento No. 10 (A/8010/Rev. 1)
- ONU (1970c). Asamblea General de la ONU. Vigésimo Quinto período de sesiones (1806ª Sesión Plenaria). A/PV.1939-1866.
- PASTOR, J. (1986). *Curso de Derecho Internacional Público*. Madrid. Ed. Tecnos.
- PEANSON, I. (1983). *Manual of the terminology of public international Law (peace) and International Organization*. Brussels.
- PEREZ, V. (1973). *Naciones Unidas y los principios de la coexistencia pacífica*. Madrid, Ed. Tecnos.
- PRAIDER, F. (1922). "Traité de Droit International Public". Vol. Et. Rue Toullier 13. Paris.
- REMIRO, A. (1972). *La hegemonía norteamericana factor de crisis de la OEA*. España. Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia.
- REMIRO, A. (1983). *Derecho Internacional Público I. Principios fundamentales*. Madrid. Ed. Tecnos.
- RUDA, J.M. (1969). *Principios de Derecho Internacional relativos a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados*. Ponencia en el Séptimo Congreso Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional, Buenos Aires.
- STOWELL, E. (1931). *International Law a Restatement of Principles in conformity with actual practice*. New York. Hery Holt and Company, INC.
- STOWELL, E. (1932). "La théorie et la pratique de l' intervention", en *Recueil des Cours Académie de Droit International*, tome II, 40 de la collection, Recueil Sirey.

Notas

- ¹ Véase documentos oficiales de la Asamblea General, Vigésimo Período de Sesiones, Anexos, Temas 90 y 94 del Programa, párrafo 3. p. 87.
- ² Véase Asamblea General Vigésimo Período de Sesiones. Anexos. Temas 90 y 94 del Programa, párrafos 26, p. 91.
- ³ *Ibid pp.* 99-102.
- ⁴ *Op. cit.*, párrafo 43, pp. 94-98.
- ⁵ *Ibidem.*
- ⁶ *Op. cit.*, pp. 103 y 104.
- ⁷ *Op. cit.*, párrafo 22, p. 163.
- ⁸ Asamblea General. Vigésimo Segundo Período de Sesiones. Anexos. Tema 87 del Programa, pp. 24-25.
- ⁹ Asamblea General. Vigésimo Tercer Período de Sesiones. Anexos. Tema 87 del Programa, pp. 6-8.
- ¹⁰ *Op. cit.*, párrafos 35-36, p.8.
- ¹¹ Asamblea General. Vigésimo Cuarto Período de Sesiones. Anexos. Tema 89 del Programa, p.5.
- ¹² Doc. A/AC.125/SR, p.6.
- ¹³ *Op. cit.*, p. 9.
- ¹⁴ Véase artículo 51 de la Carta de la ONU.
- ¹⁵ Asamblea General. Vigésimo Período de Sesiones. Anexos. Temas 90 y 94, párrafo 202, p. 126.
- ¹⁶ *Op. cit.*, párrafo 211, p. 129.
- ¹⁷ *Op. cit.*, párrafo 216, p. 129.
- ¹⁸ *Ibidem.*
- ¹⁹ Asamblea General. Vigésimo Período de Sesiones... párrafo 219, p. 130.
- ²⁰ *Op. cit.*, p. 137.
- ²¹ *Op. cit.*, párrafo 292, p. 139.
- ²² Asamblea General. Vigésimo Segundo Período de Sesiones. Anexos. Tema 87 del Programa, párrafo 307, p. 51.
- ²³ Asamblea General. Vigésimo Período de Sesiones. (1408 Sesión Plenaria). 21 de diciembre de 1965, párrafo 42, p. 5.
- ²⁴ Asamblea General. Vigésimo Segundo Período de Sesiones. Anexos. Tema 87 del Programa, párrafo 365, p. 60.
- ²⁵ *Op. cit.*, p.51.
- ²⁶ *Op. cit.*, pp. 73 y 74.
- ²⁷ Asamblea General. Vigésimo Cuarto Período de Sesiones. Tema 89 del Programa, p. 4
- ²⁸ Asamblea General. Vigésimo Período de Sesiones. Anexos. Temas 90 y 94 del Programa, párrafo 293, p. 141.
- ²⁹ *Op. cit.* párrafo 309, p. 144.
- ³⁰ *Op. cit.*, párrafo 318, p. 145.
- ³¹ *Op. cit.*, p. 148.
- ³² Asamblea General. Vigésimo Período de Sesiones. Anexos. Temas 90 y 94 del Programa, párrafos 44, 45 y 46, p. 165.
- ³³ Asamblea General. Vigésimo Período de Sesiones... *op.cit.*, p.95.
- ³⁴ OEA/Ser. P. AG/Doc. 546/75. *Op. Cit.*, pp. 26-29.
- ³⁵ *Op. cit.*, p. 33.
- ³⁶ Esta limitación es esencial, puesto que un Estado puede intervenir en los asuntos de otro a requerimiento del gobierno de este último. Tal intervención no es imperativa, pero afecta derechos fundamentales del Estado intervenido.
- ³⁷ OEA/Ser.I/IV.2 (Véase Comité Jurídico Interamericano: Diferencia entre Intervención y Acción Colectiva).
- ³⁸ Asamblea General. Vigésimo Período de Sesiones. Anexos. (Temas 90 y 94 del Programa, párrafo 40, P. 165).
- ³⁹ *Op. cit.*, párrafo 41 p. 165.
- ⁴⁰ *Op. cit.*, párrafo 43, P. 165.
- ⁴¹ Véase *Le Monde*, 6 mayo 1965.

OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA UCA



Envío. Es una revista de análisis político y de estudios socio-económicos. Posee un enfoque predominantemente nacional (Nicaragua) y regional (México, Centroamérica y el Caribe), pero aborda con regularidad temas sobre el nuevo orden internacional y ecología. Aparece cada mes y se publica en español, inglés e italiano. Dirección: Revista Envío. Apdo. postal A-194, Managua, Nicaragua. Tel: (505) 278-2557 / 277-4888. Fax: (505) 277-2583. E-mail: envio@ns.uca.edu.ni



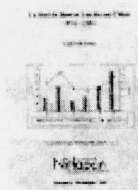
Revista de Historia. Es una publicación semestral del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA). Difunde los resultados de las investigaciones sobre la historia de Nicaragua y la región centroamericana realizadas por sus propios investigadores o por historiadores de otras instituciones nacionales o extranjeras. Dirección: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Apdo. postal C-186, Managua, Nicaragua. Tel: (505) 278-7317 / 278-7348. Fax: (505) 278-7342. E-mail: ihn@ns.uca.edu.ni



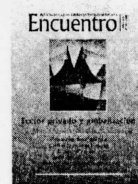
Wani. Es una revista especializada en la Costa Atlántica de Nicaragua. Sus artículos abordan el estudio de la sociedad, la cultura, la economía, la historia y los recursos naturales del caribe nicaragüense. Es una publicación trimestral editada por el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA). Dirección: CIDCA. Apdo. postal A-189, Managua, Nicaragua. Tel.: (505) 278-0854 / 278-4930. Fax: (505) 278-4089. E-mail: cidca@ns.uca.edu.ni



Taller de Historia. Aparece dos veces al año. Es editada por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA). Contiene textos y materiales bibliográficos destinados a servir de apoyo pedagógico a la enseñanza de la historia en las instituciones de Educación Superior. Dirección: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Apdo. postal C-186, Managua, Nicaragua. Tel.: (505) 278-7317 / 278-7348. Fax: (505) 278-7342. E-mail: ihn@ns.uca.edu.ni



Cuadernos de investigación de Nitlapán. Recogen los resultados de las investigaciones realizadas por el Instituto Nitlapán. Es una publicación de carácter monográfico, especializada en temas económicos. Dirección: Instituto Nitlapán. Apdo. postal A-242, Managua, Nicaragua. Tel.: (505) 278-0627/28 y 278-1343/44. Fax: (505) 267-0436. E-mail: cedoc@ns.uca.edu.ni



Revista Encuentro. Fundada en el año de 1968, *Encuentro* es una publicación trimestral de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, cuya edición está a cargo de la Dirección de Investigación de esta misma universidad. Es una revista con un perfil académico y científico, destinada a investigadores, profesores y estudiantes de la educación superior. Los artículos expresan las opiniones de sus autores y no necesariamente la posición editorial de la revista. Su contenido puede ser reproducido, citando la fuente y enviando copia de lo publicado a la Dirección de *Encuentro*. Solicitar información a: Tel.: (505) 278 3923 al 3927. Fax.: (505) 267 0106. E-mail: encuentr@ns.uca.edu.ni. Apdo. Postal N° 69, Managua, Nicaragua.

